



Buscando a GALÁPAGOS

Rafael Úzcategui

BUSCANDO A GALÁPAGOS

Activismo democrático y defensa de los derechos
humanos en espacios cívicos cerrados

Rafael Uzcátegui

BUSCANDO A GALÁPAGOS

Activismo democrático y defensa de los derechos
humanos en espacios cívicos cerrados



Primera edición: octubre de 2024

© Rafael Uzcátegui

E-mail: uzcategui.rafael@gmail.com

© Imagen de portada: José Luis Couto

E-mail: joseluiscoutoxxx@gmail.com

© Gobierno y Analisis Político AC

E-mail: info@gobiernoyanalisispolitico.org

ISBN: 978-84-127487-5-8

Queda prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del *copyright*, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, así como la distribución de ejemplares.

Impreso por Podiprint

Impreso en México



El papel utilizado para la impresión de este libro
está calificado como papel ecológico.

*A todas las personas que han salido de su país
y siguen soñando con los ojos abiertos para regresar.*

«Usted condena al proletariado europeo porque no ha reprobado públicamente a los sóviets, pero también condena a los Gobiernos de Europa porque admitirán a España —gobernada por Francisco Franco— en la UNESCO. En este caso, solo veo una solución para usted: las islas Galápagos».

Respuesta de Jean Paul Sartre a Albert Camus, 1964

INTRODUCCIÓN

En el año 1964 se realiza uno de los debates cruciales para las ideas contemporáneas. Ocurrió dentro de las páginas de la revista francesa *Los tiempos modernos* entre Jean-Paul Sartre y Albert Camus. El argelino había publicado su libro *El hombre rebelde*, el cual fue dura y ampliamente criticado por Francis Jeanson en un texto de veintidós páginas publicado en la edición número 79 de la revista. La reacción de Camus aparece tres ediciones después, convencido que detrás de aquella diatriba se encontraba el propio Sartre. El fondo de la discrepancia era la denuncia sobre la existencia de campos de concentración en la Rusia soviética. El autor de *La peste* reivindicaba el hecho de cuestionar tanto los excesos de las potencias occidentales como los desmanes del bloque comunista. La respuesta de Sartre apareció en esa misma edición: «Usted condena al proletariado europeo porque no ha reprochado públicamente a los sóviets, pero también condena a los Gobiernos de Europa porque admitirán a España —gobernada por Francisco Franco— en la Unesco; en este caso, solo veo una solución para usted: las islas Galápagos».

Es precisamente ese espíritu de alteridad, basado en principios y alejado de las camisas de fuerza ideológicas, el que anima los textos de esta recopilación. Salvo los textos inéditos, los escritos fueron publicados entre los años 2014 a 2024

en el periódico digital *TalCual*, el periódico impreso que en el año 2000 fundó en Caracas Teodoro Petkoff, y que hoy sobrevive como portal de noticias en una Venezuela bajo hegemonía comunicacional y emergencia humanitaria compleja.

Debido a mi formación política anarquista, derivada de la interacción con dos veteranos de la Guerra Civil española exiliados en Venezuela, la llegada al poder de Hugo Chávez, a finales de 1998, fue interpretada desde el completo escepticismo. Esta crítica fue desarrollada en las páginas de *El Libertario*, un tabloide trimestral del cual hicimos 76 números entre los años 1995 a 2015. Los argumentos se reivindicaban desde una identidad diferente al binomio chavismo-antichavismo, en momentos en los que la polarización arrojó y redujo todas las identidades políticas previas. El derecho al pensamiento propio se ejerció y se divulgó en condiciones muy adversas, actividad que hoy es mucho más urgente dada la profundización de la crisis multidimensional del país, así como la transformación de su Gobierno autoritario en una dictadura del siglo XXI.

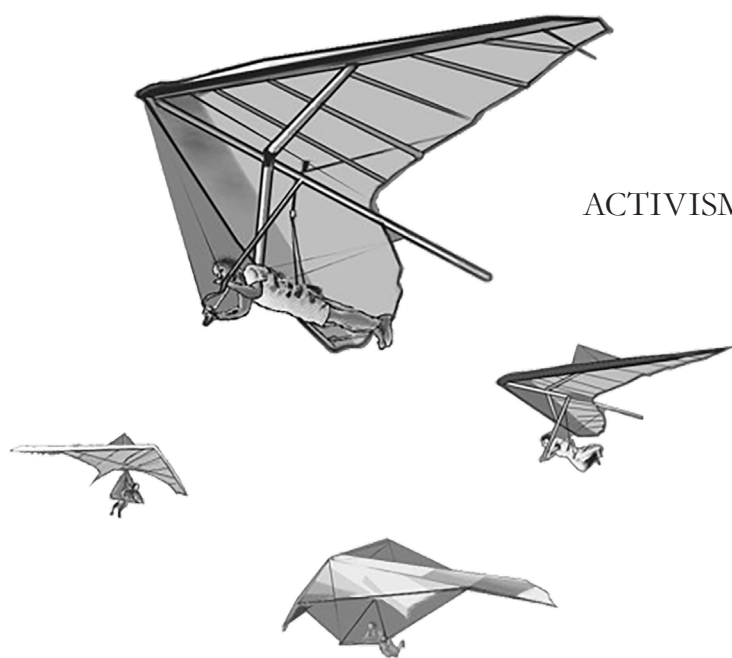
El criterio de selección de los textos ha sido el diálogo posible con situaciones similares experimentadas por otros países de la región con el cierre de sus espacios cívicos, especialmente Cuba, Nicaragua, El Salvador y México. Además, agregué algunos textos sobre posibilidades y enfoques no convencionales, fuera de la caja habitual. Aunque viví en primera persona los dislates de quienes desde fuera intentaban convencerme de lo que pasaba en mi país, espero que los desvíos de la experiencia bolivariana realmente existente, así como las solidaridades acríicas que suscitó, ayuden a las conversaciones nacionales, en tiempos de pesimismo y desconcierto. A fuerza de constancia y persistencia, las compañeras

feministas lograron que se dejara de normalizar la violencia de género, y que hoy tengan el alto costo político y social que tienen. Si algo precisamente nos anima es lograr algo similar: que los dobles estándares, los diferentes raseros con los que se evalúan los Gobiernos conservadores —seguramente con toda razón— sean aplicados sin ningún tipo de titubeos contra Gobiernos que se califican como progresistas y que la hipocresía y los silencios acomodaticios comiencen a ser mal vistos, y por tanto, avergonzantes, en el debate político. Finalmente, los textos han sido agrupados en tres bloques temáticos: activismo, defensa de los derechos humanos y democracia.

Me gustaría agradecer a todo el equipo de GAPAC, pero especialmente a Armando Chaguaceda, la oportunidad de que estos textos aparezcan compilados como libro, y con ello, que sigan teniendo vida fuera de los contornos del debate venezolano para dar excusas a la conversación regional sobre estos temas y la solidaridad transfronteriza consecuente.

RAFAEL UZCÁTEGUI

Ciudad de México, junio 2024



ACTIVISMO

ANTIMILITARISMO PARA EL SIGLO XXI

Ante el advenimiento de tiempos posideológicos en América Latina, el antimilitarismo como universo simbólico puede proporcionar una base conceptual de acción para los movimientos sociales en el futuro.

El fin de la década progresista en el continente

Paradójicamente fue el mercado internacional, mediante el alza de precios de las materias primas, quien proporcionó la base financiera que posibilitó la llamada «década progresista» en Latinoamérica, la serie de Gobiernos que, identificados con la izquierda, llegaron al poder por elecciones en diferentes países a partir del año 1998, generaron múltiples expectativas.

No obstante, la profundización del modelo económico extractivista fue consensuado por Gobiernos de diferentes signos ideológicos con lo cual varios de los Estados, a diferencia de lo propuesto en la etapa neoliberal que caracterizó la década de los noventa, recuperaron en América Latina su capacidad regulatoria y de atracción de capitales. Sin embargo, hoy la realidad comienza a ser otra. Desde el año 2013 los

altos precios de los recursos energéticos y de otras materias primas han comenzado a decaer, lo que ha disminuido los altos ingresos estatales que posibilitaron las políticas sociales que caracterizaron al «progresismo», con el que un porcentaje de la renta extractivista se redistribuía a los sectores populares. La contracción de la inversión social, como consecuencia de la crisis económica tras los años de bonanza financiera, está generando impactos en amplios sectores de la población y, de nuevo, el aumento de los índices de pobreza en el continente. A esto hay que sumar la ineficiencia y la corrupción en la gestión pública, amparados todo este tiempo por la lealtad política.

En consecuencia, el agotamiento del modelo de gobernabilidad del imaginario del activismo «progresista» se cataliza con la aparición de crisis económicas en Brasil, Argentina y Venezuela, por ejemplo. Pero este eclipse, también, tiene como gran telón de fondo el diálogo entre los Gobiernos de Cuba y Estados Unidos, anunciadas como la «normalización» de las relaciones entre ambos, pero que como secuela de la apertura en la isla se expandirán modelos de consumo y gestión propios del capitalismo tradicional. La imagen de la visita de Barack Obama en La Habana, y detrás el ejército de franquicias internacionales, será un golpe simbólico al referente de la Revolución a lo latinoamericano tan importante como lo fue la caída del Muro de Berlín para Europa. La integración de Cuba al flujo capitalista global cerrará un capítulo de la historia de la región, implosión cuyas ondas expansivas incidirán en el progresismo.

Nos guste o no, Latinoamérica experimenta un período de transición hacia el momento de su devenir. No será solo la sustitución de unos Gobiernos «progresistas» por otros (de

carácter híbrido, de centro o más a la derecha, eso estaría por verse), sino un amplio desencanto con el incumplimiento de sus propias promesas, la permanencia con las causas estructurales de la pobreza, la devastación del aparato productivo interno por la dependencia del extractivismo y la degradación del medio ambiente y los hábitats indígenas, el enriquecimiento súbito de sus voceros, las denuncias de violación a los derechos humanos y el anquilosamiento del sectarismo y discriminación como política de Estado.

En esta posibilidad las fuerzas conservadoras intentarán aprovechar el momento para convencer de las limitaciones de las aspiraciones revolucionarias de cambio, y la supuesta valía del pragmatismo y el racionalismo económico. Afortunadamente la naturaleza intrínseca de hombres y mujeres de rebelarse ante las injusticias generará espacios para deseos de transformación, los cuales necesitarán de nuevos referentes.

El objetivo del presente texto es argumentar cómo en este escenario «posideológico», los valores del movimiento antimilitarista pueden nutrir la renovación del imaginario del activismo latinoamericano.

Antimilitarismo como movimiento

¿De qué hablamos cuando planteamos aportes desde un «movimiento» en este lugar del mundo? Lo que se conoce como «movimiento antimilitarista», es decir una serie de iniciativas que se opusieron a los efectos de la existencia de ejércitos nacionales, tuvo desde la década de los ochenta en América Latina cuatro matrices: En primer lugar, los grupos religiosos para los cuales el mandamiento de «no matarás» implicaba rechazar la participación en las maquinarias de la guerra; luego,

los grupos de derechos humanos opuestos a los excesos de las dictaduras militares y en defensa del derecho a la objeción de conciencia —negarse a ingresar en las Fuerzas Armadas por razones morales—; en tercer término los partidos políticos e iniciativas de la izquierda marxista revolucionaria, para quienes las Fuerzas Armadas eran un brazo del imperialismo, formados en la llamada «Escuela de las Américas» y títeres de la lucha antisubversiva y, por último, los grupos anarquistas, que calificaban al ejército como un apéndice del Estado que concentraba los antivalores que rechazaban —culto a la jerarquía y la autoridad, patriotismo, pensamiento único, machismo, entre otros.

El universo antimilitarista latinoamericano tuvo su «edad de oro» en la década de los noventa, cuando un vector de cohesión era la lucha contra la conscripción y el servicio militar obligatorio. El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) fue clave para motorizar, en los pañales de la era internet, un trabajo coordinado en red entre las organizaciones pacifistas, universitarias y religiosas de diferentes países de la región. Fue así como se logró promover que leyes y constituciones eliminaran el deber de ir a los cuarteles, como parte de la transición en países que dejaban atrás las dictaduras, lo que generó un efecto rebote en quienes tenían democracias formales de más larga data. En Paraguay, donde el movimiento era particularmente fuerte, el sentimiento anticastrense continuó con otras reivindicaciones como la objeción fiscal, donde se pedía que los impuestos no fueran destinados al Ministerio de Defensa. En otros, las iniciativas perdieron fuerza a medida que el servicio militar perdía su obligatoriedad.

Organizaciones con trabajo antimilitarista, de todas las tendencias, persisten hoy en América Latina, quizás con me-

nos especificidad en el cuestionamiento a las Fuerzas Armadas, pero vinculando la militarización de los territorios y los cuerpos, tendencia presente hoy en el continente, con diferentes luchas de resistencia.

Nuestro antimilitarismo

Más cercanos a la mirada ácrata del antimilitarismo, consideramos al ejército como un dispositivo de dominación que sintetiza antivalores, por lo que valoramos el antimilitarismo tanto como táctica como como estrategia, como fin y como medio. El militarismo, entonces, no sería solo la presencia física de los ejércitos en territorios determinados, sino también la incidencia de sus valores y sus modos de resolver los conflictos en el funcionamiento de la sociedad. Nuestro antimilitarismo no distingue uno «menos malo», asociado a prácticas que se reivindiquen «de izquierda», del militarismo ligado a fuerzas políticas de centro o derecha.

Si el militarismo promueve la uniformización y considera la diferencia como una amenaza, nosotros planteamos, en primer término, el derecho a la alteridad, a ser diferente y a pensar diferente. Esta crítica a la vocación que pretende abarcar e imponer el todo, omniabarcante, tiene parentesco con la refutación posmoderna a las ideologías como reductoras de la complejidad de la realidad a un mandato único e impuesto por las vanguardias de pensamiento al conjunto de hombres y mujeres. Y esto es así porque después de un siglo dominado por la confrontación ideológica se han demostrado las limitaciones de todas ellas, así como su imposibilidad de abarcar en un solo *corpus* teórico la complejidad de la experiencia humana. Lo contrario al «socialismo de cuartel», la

homogeneización del pensamiento y el orden basado en uniformidades, es la valoración de la diversidad, lo heterogéneo y lo disidente. Las pretensiones de «totalidad» ideológicas serán sustituidas, como respuesta posideológica a corto plazo, por valores a la vez universalistas y fragmentarios, que no uniformicen —menos con tela de camuflaje— sino que permitan la expresión y legitimación de lo múltiple, tanto a nivel de roles como de identidades.

Por lo anterior, los antimilitaristas tenemos mejor capacidad —que ciertas izquierdas, por lo menos— a relacionarnos con iniciativas de reivindicación de la diversidad sexual o el propio movimiento indígena, por ejemplo, en el entendido que no deseamos subordinarlo a una identidad superior —el «socialismo» por ejemplo, o ser «de izquierda»—, sino que los valoramos en sus propios deseos y subjetividades: no queremos que sean otra cosa que lo que ya son.

Esto nos lleva a una segunda dimensión, que es el reconocimiento de todas estas identidades y roles como vinculadas a personas que son sujetos de derechos que deben ser reconocidos por el resto. Esto parece un sobreentendido, pero fue uno de los «principios» olvidados por el progresismo en el poder, el cual intentó imponer una hegemonía discriminatoria de quien disintiera, por las razones que fuesen, del poder de turno. Esta particular idea del cambio social, la construcción de una hegemonía que reprima e intente anular las singularidades, se ha alimentado de la noción militar de la primacía de la violencia —simbólica y física— para la resolución de los conflictos. En contraste, la filosofía no violenta ha trabajado la construcción del consenso entre los diferentes, una práctica genuinamente democrática desde la base.

El antimilitarismo siempre ha sido crítico con las jerarquías y desigualdades inherentes al modelo de organización de las Fuerzas Armadas, y ha establecido los vínculos con el negocio capitalista del tráfico de armas y la reconstrucción de los países tras los conflictos bélicos. Asimismo, ha denunciado el uso político de las disputas fronterizas entre países que intentan con la exacerbación del nacionalismo y la construcción del enemigo exterior maquillar las crisis sociopolíticas internas.

Un individuo con la capacidad de pensar y decidir por sí mismo/a es lo contrario a la noción de «soldado», dispuesto a seguir órdenes acríticamente de las jerarquías y la autoridad. Si la idea de reinención de la democracia tendrá sentido en los próximos años para Latinoamérica, en donde los ciudadanos puedan tener la capacidad de experimentar nuevas formas de relacionamiento directo, creando tejido asociativo de carácter cooperativo y solidario, eso pasa por funcionar con valores y racionalidades ajenas a la militar. Es en este panorama los antimilitaristas tendremos una oportunidad para incidir, de manera estelar, en los movimientos sociales que protagonizarán, desde México hasta Argentina, las luchas del futuro.

Publicado en junio de 2016

POÉTICA DE LA RESILIENCIA

1. Sea parte del avispero y no de la queja proveniente del «camión de cochinos»: un enjambre debilita, desde diferentes puntos, a un adversario común. En el momento de la ofensiva las avispas trabajan, junto a otras, para clavar su aguijón en el punto que consideran más efectivo para neutralizar a su adversario. No se detienen para criticar a las otras que han decidido atacar por otros lados, pues saben que la suma de todos los diferentes piconazos serán importantes para alcanzar el objetivo común. En cambio, todos los cerdos encerrados en un camión van al matadero, sin resistencia, porque gastan sus energías únicamente en quejarse de todo: del encierro, de lo que hacen o dejan de hacer los otros cochinos en ese momento y hasta del propio camión.

2. Las ideas están para discutirse —a veces intensamente—, las personas para respetarse: ¿Sabía usted que Joseph Stalin fue uno de los impulsores de la estrategia de desacreditar al mensajero en vez de refutar sus argumentos? Esta peculiar práctica política ha sido incorporada progresivamente por sectores en lucha por la democracia y ha sido tan efectiva que la dictadura ha creado decenas de cuentas fantasma en redes sociales para azuzar las peleas intestinas basadas en los adjetivos descalificativos contra las personas.

3. Ni se aíse ni dejen que lo incomuniquen: la dictadura es minoritaria y su principal estrategia es la fragmentación, la división de los contrincantes y la inoculación de la sospecha entre ellos para imposibilitar cualquier acción conjunta. El tuiteo en solitario debe complementarse con la existencia de espacios para la construcción de ciudadanía, donde nos ponemos de acuerdo con otros, que son diferentes a nosotros, para la acción colectiva.

4. Colabore, gestione y mantenga medios de información verificada y de calidad: el aliado de las dictaduras es la invisibilidad. Y como el ocultamiento en tiempos de redes sociales es casi imposible, la dictadura ensucia los flujos informativos con datos falsos, para viralizar la desconfianza de las propias plataformas. Por ello es una labor «política», en todo el sentido del término, verificar la información que divulgamos en los medios a nuestro alcance y contribuir a la construcción de narrativas de calidad con hechos y datos confiables.

5. Vigorizar la confianza en lo interno de la comunidad en resistencia la fortalece: los movimientos sociales necesitan una identidad compartida entre sus integrantes, pero especialmente en Venezuela funcionan más y mejor las relaciones de confianza que las institucionalizadas. El sentir con los otros y sentirse cómodo trabajando con ellos se genera y multiplica de muchas maneras: creando espacios de encuentro y confluencia, reconociendo lo positivo de los esfuerzos ajenos, haciendo balance de lo aprendido, etc.

6. Enfóquese en dar el siguiente paso de la mejor manera y no en retornar a la democracia de manera «exprés»: El sentimien-

to maximalista del todo o nada, o la inmediatez de resultados, abre camino a las frustraciones y la desesperanza. No siempre la historia es cambiada por un suceso sino por diferentes pasos y etapas que logran el objetivo deseado. Concéntrese en su siguiente actividad en resistencia y trate de realizarla lo mejor posible, para dar el siguiente paso.

7. Promover el recuerdo y la memoria es una forma de resistir al totalitarismo: el «hombre nuevo bolivariano» solo es posible si olvidamos lo que fuimos alguna vez, con sus matices y diversidades. La identidad cultural construida tras años de eventos, sucesos y personajes es un antídoto contra la imposición ideológica de cualquier signo.

8. Trate de ser lo más feliz posible: los autoritarios lo quieren resignado y deprimido. Parte de las estrategias de autocuidado es continuar realizando, pese a las circunstancias, las actividades que lo hacen sentir bien. Celebre lo que deba festejar, reúnase lo más posible con sus seres queridos, tome vacaciones o disfrute de sus actividades predilectas de cuando en cuando, aunque sea algunas horas. Necesitamos aliados en resistencia vivaces, proactivos, felices y en paz consigo mismos.

Publicado en febrero de 2018

LO QUE UNO HACE ES EL DISCURSO

En el sugerente texto «Sé la narrativa. Cómo cambiar la narrativa podría revolucionar el activismo en derechos humanos», Krizna Gómez y Thomas Coombes dan algunas ideas para enfrentar la retórica populista, que desde Estados Unidos pasando por Turquía, India, Rusia y Venezuela, está haciendo retroceder a los valores que le daban sustento a la dignidad humana. Si bien su reflexión está focalizada en los activistas de ONG, los planteamientos pueden ser de utilidad para todo el actual movimiento democrático venezolano, ante la ausencia de una promesa de futuro que sea más atractiva y seductora para las mayorías que los delirios emanados desde el bolivarianismo. En una conceptualización que comparto, entienden a los populismos como aquellos procesos políticos con dos componentes fundamentales: su antipluralidad, al promover la discriminación como cemento de construcción para su base de apoyo, y, en segundo término, el fundamento de su actuación en una supuesta confrontación contra unas «élites» definidas por el líder carismático, responsables de todo lo malo que sucede en el país.

¿Cómo se enfrentan a los populistas? En primer lugar, comprendiendo sus estrategias. Gómez y Coombes las han agrupado en tres tipos principales: controversia, crisis y con-

flicto. Los populistas prosperan en la controversia —afirman— porque es en tales entornos donde exageran su importancia: una mano firme en medio de la confusión y las proyecciones inciertas sobre el futuro. Además, al promover la confusión en la imaginación del público, distraen la atención sobre el propio incumplimiento de sus promesas.

La crisis, real o inventada —aseguran—, es un mecanismo de cohesión de sus seguidores detrás de la autoridad incontestable del caudillo, funcional a la derogación de derechos y persecución a la disidencia. Por último, sobre el conflicto, apuntan: «Los populistas modelan su identidad como una oposición a algo o alguien». A diferencia de los autoritarismos y las dictaduras del pasado, que aspiraban a la eliminación física de sus adversarios, los populistas modernos necesitan la existencia de ese «otro», en cuyo antagonismo justificarán las medidas excepcionales —que terminan por convertirse en permanentes— para perpetuarse en el poder.

Para enfrentar narrativamente estas estrategias proponen responder a cada una con un valor opuesto: la controversia con la cultura, la crisis con la cooperación y la reconstrucción de la comunidad al fomento del conflicto. En vez de reaccionar automáticamente a los mensajes populistas, aconsejan crear sus propios marcos de mensajes alternativos, pues la refutación en sus mismos términos, por ejemplo «los defensores de derechos humanos no son imperialistas», significa reforzar el concepto mismo de ser manejado por intereses foráneos, dejando la sospecha en el aire, precisamente el objetivo de las salas situacionales populistas.

¿Cómo se construyen este tipo de mensajes? Para iniciar debemos entender el componente lógico y subjetivo de las personas: «Los seres humanos entienden el mundo que los

rodea a través de una combinación de pensamiento emocional y racional, pero la ciencia del cerebro nos muestra cada vez más que el pensamiento emocional subconsciente es el más dominante de los dos, incluso en dominios racionales como la ley (...). Si pensamos que estamos usando un lenguaje neutral, científico o legal, nuestras palabras pueden ser interpretadas por otros de la manera que no esperamos».

Seguidamente explican los componentes de la vocería pública, que deben tomarse en cuenta para la elaboración de un contradiscurso al populismo: historias, narrativas y marcos. Las historias serían cómo se cuenta un momento o evento específico. Cuando se repiten, las historias comienzan a formar una narrativa consistente. Por su parte, una narrativa sería: «La forma en que los eventos o historias se conectan y presentan para formar una nueva creencia, una comprensión de “sentido común” de lo que está sucediendo». Finalmente, un marco sería: «Las palabras, imágenes, metáforas u otros desencadenantes que hacen a la audiencia interpretar una historia a través de una cierta narrativa». Cuando las personas encuentran nuevas ideas, información, historias o experiencias, los interpretan usando los marcos narrativos existentes que esos estímulos activan en su cerebro. Estos marcos se encuentran en las mentes de nuestra audiencia si los activamos consciente o inadvertidamente. Como el estratega político Frank Luntz escribe: «Puedes tener el mejor mensaje del mundo, pero la persona que lo recibe siempre lo entenderá a través del prisma de sus propias emociones, preconceptos, prejuicios y creencias preexistentes».

Como lo dejan suficientemente claro en el documento, no se sugiere que formular un lenguaje políticamente correcto, o conseguir eslóganes viralizables, transformará mágicamente

la realidad: «Mostrar es mucho más poderoso que contar. Lo que uno hace es la narrativa, lo que uno dice es simplemente el intento de enmarcarlo». ¿El movimiento por la democracia en Venezuela está prefigurando, aquí y ahora, el modelo de sociedad que desea para el futuro? La fragmentación y luchas intestinas actuales sugieren lo contrario. Los gremios y organizaciones de la sociedad civil pudiéramos comenzar a revertir la separación —la principal victoria de la dictadura madurista—, si comenzamos a ejercitarnos en la reconstrucción del sentido de pertenencia a la comunidad «Venezuela». La promoción incesante de la cooperación y las experiencias culturales compartidas pudieran comenzar a sanar las fisuras que el daño antropológico ha creado en el tejido asociativo que posibilita una actuación política, en sentido amplio, común por el cambio.

Publicado en febrero de 2020

MÁS *BREAKING BAD*, MENOS CHE

Los jóvenes venezolanos de un rango de edad entre los veintitrés a quince años no tienen otra experiencia política que la experimentada bajo el bolivarianismo. Por lo menos, dos generaciones han crecido bajo la influencia, discursos y resultados concretos del chavismo, y su derivación madurista, en el poder. Y como un pedazo de esta muchachada participará, en el presente y en el futuro, en política, entendida en un sentido amplio, vale la pregunta de cuáles podrían ser sus referentes para intentar incidir en su entorno.

Sin necesidad de estudios estadísticos a la mano, una primera respuesta es que su imaginario será diferente del que marcó a los activistas que los precedieron, tanto de la izquierda tradicional (Revolución rusa) como de la heterodoxa (Mayo francés). Por acción y omisión, el llamado «socialismo del siglo XXI» recuperó la mayoría de estos contenidos para construir su hegemonía, una que los adolescentes de hoy entienden (y con razón) como un modelo biopolítico de dominación sobre sus mentes y cuerpos. Para estos chamos las franelas del Che, las canciones de Silvio Rodríguez y Alí Primera, así como los libros de Trotsky, Marx y Gramsci pertenecen a «los otros», esos quienes —entre otras cosas— los han apaleado en las manifestaciones. Por ello, por razona-

miento o simple repulsa, sus búsquedas personales estarán en otro lado: en la cultura digital, las series de televisión, los músicos, los artistas de cine o las novelas gráficas.

En segundo lugar, tras década y media de hiperpolitización endógena, la pretensión de que una doctrina «correcta» tiene las respuestas para todo, nos ha sintonizado mundialmente con la crisis del pensamiento ideológico y la razón positivista alrededor del planeta. Por ello, es sentido común el suponer que las aspiraciones del nuevo activismo serán más parciales y fragmentadas (el derecho a la ciudad, la libertad de expresión), capaces de generar efímeras y flexibles coaliciones para su realización —a diferencia de la creación de estructuras formales y partidos leninistas—, más orientadas al individuo que a la «salvación» colectiva (el vegetarianismo, el derecho al aborto, la despenalización del uso de drogas) y alérgica a los liderazgos verticales e incontestables, para acercarse a modelos de influencia descentralizada y creación de masa crítica. Al subversivo clandestino de los sesenta, los nativos digitales anteponen el ego, el prestigio personal y la confianza que emana de las redes sociales.

¿Esto significa —como han opinado algunos— que la juventud poschavista es y será «reaccionaria» y de «derecha»? No lo creo. Uno, porque las etiquetas tradicionales serán incapaces de clasificarlos. Y dos, porque como lo explicó Albert Camus, el hombre y la mujer inconformes con las injusticias de su tiempo no se agotan en lo «revolucionario», sino que —afortunadamente— son, por naturaleza, «rebeldes». Y, cuando las circunstancias sean intolerantes, darán su grito para decir «No».

Publicado en junio de 2016

EL ACTIVISMO QUE YA NO ES POSIBLE

El pasado 27 de febrero, en un aniversario más del Caracazo —una serie de saqueos y disturbios masivos que azotaron Caracas en febrero de 1989 y dejaron cientos de muertos—, reapareció la discusión sobre por qué situaciones similares no ocurrieron en Venezuela durante los peores años de la crisis y bajo una emergencia humanitaria compleja. La respuesta pasa por que el chavismo tenga en cuenta la variable de una posible repetición de los hechos de febrero de 1989, pese a la presencia de las «condiciones objetivas» que provocaron los saqueos. Tal como supo del 11 de abril de 2002 y de las protestas de 2017, Miraflores ha cortado el conjunto de vínculos asociativos que hacían posible la expresión de la indignación de las multitudes.

En el caso del Caracazo, repetiremos ideas del foro «Derechos Ambientales Ayer y Hoy», realizado el 18 de noviembre de 2023 en la Casa Disiente de Caracas, donde los activistas Claudia Rodríguez, Jorge Padrón y Liliana Buitrago hicieron un balance histórico del movimiento ecologista en Venezuela. Aunque hoy no lo parezca, en la década de 1990 el movimiento ambientalista tenía presencia en casi todo el país, y demostró una importante capacidad de movilización e incidencia ante las autoridades.

Como se recordó en el debate, en 1997 los ambientalistas venezolanos lograron generar masa crítica suficiente para revertir el llamado Decreto de 1850, que permitía la actividad extractiva en la reserva forestal de Imataca en los estados de Bolívar y Delta Amacuro. Un bolivarianismo emergente, en forma de movimiento político-electoral, capitalizó las demandas ciudadanas a su favor —asimilando a buena parte de aquellos activistas verdes de los años noventa—. Pero la cooptación del Estado tenía como objetivo neutralizar la capacidad autónoma de movilización y lucha de la sociedad, incluido el ambientalismo. El derribo de torres de transmisión por parte de indígenas en Brasil en el año 2000 fue el último viento de independencia del ambientalismo venezolano.

En 2004, Chávez emitió el Decreto Presidencial 3110, que permitió nuevamente la explotación minera y maderera en Imataca. Y la decisión, en plena popularidad del izquierdista de Sabaneta, se produjo sin respuesta social alguna. Los verdes combativos de antaño ya formaban parte del nuevo *establishment*. Sin embargo, la transformación de los defensores de los derechos ambientales en funcionarios es insuficiente para explicar este apaciguamiento. Esto fue acompañado por una política deliberada para poner fin a las condiciones materiales que apoyaban y hacían posible este tipo de activismo.

La primera de estas decisiones fue doblegar la red de universidades públicas del país. Los análisis del enfrentamiento del chavismo con las instituciones de educación superior han tendido a explicarlo por el acaparamiento de la libertad académica y la generación de conocimiento, lo cual es cierto. Sin embargo, una dimensión que se omite es que la Universidad Central de Venezuela (UCV) y universidades similares fue-

ron un territorio clave de funcionamiento no solo para las organizaciones de izquierda, sino para todas las expresiones asociativas y sindicales que surgieron en el país desde finales de los años setenta.

La infraestructura de la universidad fue clave, durante mucho tiempo, para el surgimiento y expansión de demandas de todo tipo. Sus aulas y auditorios albergaron reuniones periódicas y encuentros regionales y nacionales de diversa índole, sin costo alguno para sus promotores; los comedores universitarios se encargaron del catering durante esos días; sus buses garantizaron la movilización, tanto en la ciudad como hacia distintos puntos del país; los impresores universitarios duplicaban proclamas y manifiestos, en *offset* o en rudimentarias multigrafías; profesores y estudiantes procesaron los datos que alimentaron la narrativa de las demandas.

Acabar con la universidad también fue una forma de eliminar el sustrato material utilizado por las organizaciones sociales y populares del país. Si la metáfora es válida, es como si un partido político de amplio alcance tuviera todas sus sedes nacionales allanadas y confiscadas al mismo tiempo. Su capacidad operativa se verá considerablemente reducida.

Una segunda dimensión del activismo característico de los años 1980 y 1990, que finalmente llevó a Hugo Chávez al poder, es que se basó en gran medida en el voluntariado. A diferencia del esquema posible a través de la cooperación internacional, que se desarrolló en todo el mundo a finales de los años noventa, en esos años los distintos y emergentes movimientos vecinales, estudiantiles, indígenas y contraculturales se basaron en el esfuerzo voluntario y el apoyo mutuo altruista.

Las personas recibían un salario suficiente para cubrir sus necesidades básicas, por lo que tenían la posibilidad de dedi-

car su tiempo libre e incluso financiar de su propio bolsillo las iniciativas ciudadanas en las que participaban. Con el poder adquisitivo del salario dinamitado, colocando a todas las personas en la lucha darwiniana por la supervivencia, no hay tiempo, ganas ni posibilidades económicas para transformar la realidad mediante un esfuerzo asociativo.

Una tercera y última dimensión, que agrego desde mi propia perspectiva, es la ruptura de los vínculos comunitarios horizontales en los sectores de bajos ingresos. Cuando el Gobierno conoció la crisis económica que se avecinaba en 2014, tras la importante caída de los precios internacionales de sus principales productos de exportación, tomó dos decisiones. El primero fue crear la contranarrativa de la «guerra económica», culpando a los empresarios y al sector privado, para explicar todos los males que iban a sufrir las mayorías a continuación. Y en paralelo, realizar el mayor operativo de intervención policial-militar en los barrios del país: la Operación Liberación Popular (OLP), que con el tiempo sería reemplazada por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Tras el golpe de Estado de 2002, el chavismo llevó a cabo las purgas y reestructuraciones necesarias dentro de la Fuerza Armada para evitar que algo similar ocurriera en el futuro. Lo mismo puede decirse de las protestas de 2017. Si el Caracazo no se puede repetir después de veinticinco años de chavismo, a pesar del empobrecimiento y la marginación de las mayorías, es porque el oficialismo ha tomado medidas para destruir los vínculos sociales que lo hicieron posible.

Publicado en abril 2024

PREFIGURAR EL MAÑANA

A estas alturas es claro afirmar que el socialismo bolivariano realmente existente, el que ha ejercido el poder en la última década y media, ha sido para muchas personas la hipoteca del mañana por el presente más inmediato. El detalle es que esa contemporaneidad se limitó a la campaña electoral y el voto por el o los «candidatos de la patria», pues eso de la democracia representativa y protagónica quedó suspendido para el tiempo después de las elecciones. Y como elecciones había todos los años, la épica bolivariana se redujo a la permanente movilización electoral, al remedo de la batalla de Santa Inés, a la «victoria perfecta».

Sin embargo, después del movimientismo del socialismo del siglo XXI está la vida. En un escenario signado por la crisis de las ideologías, en el mundo se discute sobre cómo transformar el mundo, para bien, sin repetir los errores del pasado. Por ahora, las indignaciones efervescentes, potenciadas por los dispositivos personales de telecomunicación, han tomado la batuta. Coaliciones *ad hoc*, con propuestas fragmentadas que, si bien no reivindicán las ideologías rupturistas del pasado, son revolucionarias en la voluntad de romper dispositivos de dominación concretos y situados, en su esfuerzo para bloquear el poder en sus múltiples manifestaciones, y en la acción para crear espacios ajenos a los

valores y modos de vida inducidos por el capitalismo de Estado y el mercado.

Esta última constante se le ha denominado «política prefigurativa», es decir actuar y vivir hoy según los valores que se reivindican para el mañana. Si se demanda más democracia, las formas organizativas usadas deben ser lo más democráticas posibles. Si se cuestiona la discriminación, los modos políticos deben ser inclusivos y tolerantes por naturaleza. Esto parece elemental, pero lo cierto es que el siglo XX estuvo dominado por la racionalidad de la justificación de los medios por los fines, el camino empedrado al infierno con supuestas buenas intenciones de la cual el bolivarianismo venezolano es una de sus últimas expresiones.

Los fines deben estar incluidos en los medios, repitieron, sin oídos receptivos, los rebeldes derrotados por el estalinismo en todas sus variantes. Hoy, cuando todas las revoluciones han incumplido sus promesas de redención reaparecen los referentes vilipendiados por la historia. Lo que uno quiere para mañana debe empezar a construirse hoy. La hora de las bayonetas está llegando, afortunadamente, a su fin. También, la de los chantajes unitarios.

El tejido asociativo, cooperativo y solidario de base, en estos momentos de transición, debe empezar a enredarse de nuevo. Llegará un tiempo, de eso estemos seguros, en que nos burlaremos de los días en que, ajenos a la política de prefiguración, se intentó llegar a la democracia participativa y protagónica por el atajo del culto a la personalidad y la fidelidad de cuartel militar.

Publicado en junio de 2015

FEMINISMO OXÍMORON

Uno puede entender las expectativas que puede generar cualquier liderazgo o proceso político, pero otra cosa muy diferente es la invención artificial de identidades políticas para apuntalar y legitimar el ejercicio del poder de dicho movimiento. La idea de un «feminismo bolivariano» es un concepto vacío, no por su falta de contenido, sino especialmente por la ausencia de referentes previos que uno pueda identificar como genealogía de dicha idea.

Simón Bolívar pudo haber sido cualquier cosa menos un feminista. Y si «lo privado es público» como insisten las camaradas, su vida personal no era diferente a las ideas sociales imperantes en su época sobre el papel de la mujer. Bolívar, que ni era pobre ni falleció «con camisa prestada» como insisten algunos, heredó una cuantiosa fortuna familiar bajo la modalidad del «mayorazgo» que, entre otros compromisos, lo obligaban a contraer nupcias solo con damas de su misma condición social. Cada vez que usted escuche el mito de «la Libertadora del Libertador», Manuelita Sáenz, sepa que se está haciendo apología de una relación que por razones de clase evitaba formalizarse. Y para que no haya equívocos, mi valoración es la del lado del macho. Si usted quiere opinar que la quiteña es pionera del feminismo en la región, está en

todo su derecho, pero estaría negando lo mismo que precisamente desea resaltar. En vez de asumir el apellido de casada en el inexistente matrimonio, debería sostener su teorización alrededor del «feminismo saenzcista» y no del oxímoron «feminismo bolivariano».

Si los antecedentes históricos del feminismo bolivariano son irreales, las consecuencias prácticas del ejercicio del poder del chavismo realmente existente son nefastas para cualquier idea que se tenga sobre la emancipación de género. Y esto es una natural consecuencia de un proyecto político machista, patriarcal y militarista como lo es el socialismo del siglo XXI. Nunca como antes se había negado, en las diferentes dimensiones, la posibilidad de que la mujer real pudiera decidir sobre sí misma, en el intento del ejercicio pleno de su autonomía, sobre su cuerpo, sus afectos, sus posibilidades de desarrollo como persona. Algunos de estos dramas han sido reunidos en el informe «Mujeres al límite. El peso de la emergencia humanitaria» —que puede localizarse por internet— realizado por organizaciones que, y no es casualidad, no se identifican como feministas bolivarianas. De esta manera AVESA, Mujeres en Línea, CEPAZ, y FREYA compilaron los datos disponibles sobre la situación de la alimentación, la salud, la integridad personal, el tráfico y la trata de personas, el acceso a la justicia y la discriminación de poblaciones LGBTI y de mujeres indígenas con una mirada de género y de derechos humanos. Al revisar los datos, escuchar los testimonios y vincularlos con lo que se ve y padece en la calle, uno llega a la conclusión de que, si como conceptualización teórica es dudosa, como activismo de calle el feminismo bolivariano es sencillamente inexistente. Si de verdad hubiera radicalidad y principios en quienes se identifican así, sería público y vi-

sible el cuestionamiento a, por decir solo una dimensión, la manera inhumana y denigrante en la que las mujeres están dando a luz en los centros públicos de salud. No sé si Eva Golinger se identifica con el rótulo, lo que sí tengo certeza es de que cuando estaba embarazada no tuvo su parto en la revolución bolivariana que tanto defendió sino en el imperio vil que cuestiona.

Publicado en diciembre 2017

APRENDIZAJES SOBRE LAS RECIENTES ACCIONES DE ALGUNOS COLEGAS DE LA SOCIEDAD CIVIL

En días pasados, un grupo de personas integrantes de diferentes gremios y organizaciones de derechos humanos, tuvieron la iniciativa de reunirse con Nicolás Maduro y, pocos días después, remitir una carta pública al presidente de Estados Unidos con una serie de peticiones que incluían la revisión de la política de sanciones. Estas dos acciones ocurren con poco margen de días entre una y otra. Pudieran interpretarse como parte de un mismo movimiento. Han generado un abanico de reacciones en la sociedad democrática. Uno de sus elementos positivos es que nos ha obligado a encarar un debate pendiente entre nosotros: la redefinición de una estrategia colectiva que sustituya la derrotada en las protestas del 2017 (con coletazos a comienzos del 2019) y que nos sacuda la inercia y la incertidumbre en la que nos encontramos, potenciada por la situación de pandemia. En otros textos he invitado a sacar lecciones de lo que ha hecho y de lo que le han hecho a la dirigencia política para ubicarla en el actual estado de debilidad y deslegitimidad frente a la población. El sentido de este texto es sumar elementos a la reflexión sobre estas iniciativas para extraer lecciones que nos ayuden a

encarar, desde el movimiento de derechos humanos, futuras convocatorias hechas desde Miraflores, las cuales van a ocurrir en el marco de la simulación de cooperación y lo que las autoridades han definido como «diálogo inclusivo», en áreas de nuestra competencia.

Revisando lo que hemos hecho como movimiento, uno puede cerciorarse de la poca experiencia que tenemos en el diálogo político, valga la redundancia, con los políticos. Por ello es importante cualquier aprendizaje. Una aclaratoria: en este escrito no abordaremos ni la estrategia asumida por personas integrantes del Foro Cívico ni el contenido de la carta a Biden, ni las razones por las cuales el Gobierno les extiende en este momento una invitación. Su foco es la materialización, o puesta en escena, de los vínculos con autoridades hasta ayer severamente cuestionadas por su actuación antidemocrática y violatoria de derechos para dilucidar, estratégicamente, qué cosas deben hacerse diferente en el futuro.

1. Ninguna acción ocurre en el vacío: Sobre la conveniencia o no de una reunión con las autoridades, en un momento determinado, se deben tomar en cuenta los elementos de contexto que pudieran darle o variar su significación. En este momento dos situaciones se vinculan a cualquier contacto con las autoridades. La primera de ellas es una política deliberada de «normalización» que algunos de nosotros hemos denunciado parcialmente (por ejemplo, cuando argumentamos que la palabra «emergencia humanitaria» está siendo sustituida por «ayuda al desarrollo» para maquillar la situación de los venezolanos). El Gobierno ha visto una oportunidad en la aspiración legítima de la población en retomar actividades productivas para sortear la crisis y la parálisis de la pandemia,

e intenta posicionar una matriz de opinión sobre la supuesta «recuperación económica del país» (como ejemplo, el artículo de Temir Porras en *The Washington Post* El renacer de la economía venezolana, del 21 de febrero de 2022). La frase «Venezuela se arregló» ha sido fabricada en un laboratorio, y ha encontrado eco en un sector de la ciudadanía, por diferentes razones, con cajas de resonancia en algunos empresarios.

A esta promoción de una «normalización» cuyo motor es la supuesta recuperación económica, tenemos una segunda dimensión vinculante: la legitimación de la vocería, por parte de las autoridades, de una «oposición política no beligerante». Esto es lo que observa el ciudadano promedio: empresarios haciendo negocios con el Gobierno y políticos de oposición que son más críticos con la oposición que con el Gobierno. ¿La iniciativa de nuestros colegas pudiera ser confundida como parte del esfuerzo «normalizante»? La respuesta es sí. ¿Cómo podía esto abordarse? De ello hablaremos a continuación.

2. Cualquier vinculación con autoridades debe hacerse desde el respeto: el respeto no es solo el tono de la reunión, que entendemos fue «cordial», sino también los propios términos de la convocatoria. En este caso fue hecha con pocas horas de antelación. Los convocados y convocadas decidieron aceptar la invitación, literalmente, de un día para otro. Y esto les dio poco margen de preparación. Todas las debilidades del documento entregado, e incluso de las propias intervenciones, han sido adjudicadas al «poco tiempo de preparación». Expliquemos nuestro punto: para hablar en los organismos internacionales, en un terreno de mayor confort para los activistas, usamos semanas y hasta meses de preparación previa, a veces para intervenir solo cinco minutos. Esto permite la consulta colegiada, decidir qué

temas se abordan y cuáles quedan por fuera y, especialmente de acuerdo a la investidura del interlocutor, qué tipo de exigencias podemos hacerle: a un jefe de Estado se le plantean políticas de Estado. Como sabemos en estos casos, la improvisación debilita la incidencia. Este plazo de preparación también incluye lo que se dice antes de la reunión y lo que se comunica después de ella. ¿Cómo nos podemos anticipar a los previsivos mensajes desde medios oficiales? Convocar a una reunión de esa magnitud con tan poco plazo, además de ser irrespetuoso, tiene entre sus objetivos que los convocados asistan lo menos preparados posible.

3. El *timing*, la secuencia: a veces se puede escoger el momento más propicio para la acción, a veces no. Supongamos que esa era la única fecha posible para la reunión con Maduro, y que esa variable no era controlable por los convocados. Pero la de la aparición de la carta pública a Biden, sí. En este caso el orden de los factores sí altera el producto. Que se divulgue pocas horas después del cónclave en Miraflores genera una conclusión: la misiva es su consecuencia, y ha aumentado con ello la vinculación al esfuerzo normalizante. Si bien podemos compartir la petición de una revisión a la política sancionatoria, esta demanda precisamente es la protagonista del actual discurso gubernamental y, por tanto, un activo simbólico oficial. La ecuación hubiera sido diferente si la secuencia hubiera sido distinta, por ejemplo: a) reunión con Maduro b) carta pública al fiscal de la Corte Penal Internacional solicitando instalación de oficina en Caracas c) carta a Biden. Incluso, si se hubiera tomado más días para divulgarla no solo se debilita la «confusión normalizante», sino también se hubiera podido aumentar la cantidad de personas adherentes. Nuestra experiencia en la redacción de comunicados sabe que la legitimidad no proviene solo de la justeza

de las peticiones, sino también de la cantidad de personas que públicamente las apoyan, mucho más si son temas que pudieran ser polémicos. En otro lugar hemos dicho que las ONG no estamos para buscar «aplausos» o «likes», y a veces hay que decir en solitario afirmaciones políticamente incorrectas. Pero la crítica de que «son solo veinticinco los firmantes» cobra una perspectiva diferente ante la incertidumbre y perplejidad creada por la secuencia de la acción dentro de lo que debería ser su base natural de apoyo: el resto de la sociedad civil. Finalmente, sobre este punto: la reunión con el dictador, por lo menos para quienes estamos convencidos de su actuación no democrática, significa un cambio cualitativo de cualquier incidencia de la sociedad civil nacional. Esto no está negado. Pero ¿había que reunirse precisamente pocos días después del anuncio de la instalación de una oficina de la Corte Penal Internacional en el país?

Debemos hacer un análisis del contexto en el que ocurre nuestra acción. Si esta pudiera confundirse o desvirtuarse por iniciativas similares de otros, debemos hacer un esfuerzo deliberado por diferenciarla y explicarla.

Conclusiones para el futuro

1. El respeto no solo se gana, sino que también se exige. Hacernos respetar es también aceptar convocatorias de reunión hechas con la debida anticipación, que nos permita prepararnos lo mejor posible para ella.
2. Cualquier acción debe fortalecer, y no debilitar, nuestra base de apoyo.
3. Las acciones colegiadas tienen mayor fortaleza que las iniciativas individuales.
4. En política el orden de los factores sí altera el producto.

Recomendaciones

1. Elaborar un discurso sobre lo que entendemos como «normalización pospandémica» en el país que se diferencie de la matriz de opinión sobre la capitulación generalizada de las aspiraciones de cambio social, económico y político detrás de la narrativa «Venezuela se arregló» promovida por el Gobierno.
2. Recuperar los espacios de confianza para los debates y conversaciones entre las organizaciones, para definir estrategias de cara al contexto actual y los desafíos del futuro.

Publicado en abril de 2022

EL PUNK MÁS QUE RUIDO: UN MÉTODO

La contracultura *punk* es un adolescente próximo a cumplir cincuenta años de edad. Esto es un hecho. En medio siglo de existencia, algunas de sus expresiones dejaron de ser lo polémicas y provocativas de sus primeros años. Incluso, buena parte de su estética ha sido asimilada por empresas internacionales de confección textil, cuyas ganancias provienen de pagar salarios de hambre en maquilas del primer mundo. Bien, esas canciones aceleradas de tres acordes nos siguen gustando hasta el día de hoy. Pero como sonido también ha sido superada por otros géneros y subgéneros que suenan más caóticos y salvajes. Podemos seguir más o menos en lo mismo, por unos cuantos años más. Pero ello no hará del *punk* «una amenaza de nuevo», como decía el eslogan de la revista *Anarcopunk* de Minneapolis Profane Existence.

No es el sonido ni es la ropa, menos la estética. En nuestra opinión lo que sigue teniendo vigencia, cinco décadas después, es el método promovido por el punk durante todo este tiempo, que muchos conocemos como «Hazlo Tú Mismo/a» (HTM). El DIY (por sus siglas en inglés) construyó una comunidad colaborativa que intentó generar tanto un estilo de

vida alternativo como un cambio en las condiciones de su entorno. Los principios del HTM que hemos aprendido son: 1) el apoyo mutuo, o la cooperación sin mando; 2) la autogestión, por lo menos parcial de nuestras vidas; 3) la experiencia por encima del lucro; 4) la reivindicación del yo sobre la tiranía de la masa y 5) la precariedad como virtud y no como limitación.

1. El apoyo mutuo: para refutar las ideas de la supervivencia del más apto, derivadas de las teorías de Charles Darwin, Pedro Kropotkin realizó una investigación en animales para demostrar que la cooperación era un factor de la evolución de las especies más eficaz que la competencia, que le permitió escribir el libro *El apoyo mutuo*: «La sociedad, en la humanidad —escribe en la introducción del libro— de ningún modo se ha creado sobre el amor ni tampoco sobre la simpatía. Se ha creado sobre la conciencia —aunque sea instintiva— de la solidaridad humana y de la dependencia recíproca de los hombres. Se ha creado sobre el reconocimiento semiconsciente de la fuerza que la práctica común de dependencia estrecha de la felicidad de cada individuo de la felicidad de todos, y sobre los sentimientos de justicia o de equidad, que obligan al individuo a considerar los derechos de cada uno de los otros como iguales a sus propios derechos». El concepto de ayuda mutua, que fue básico para el anarquismo del siglo XIX, ha trascendido como principio a muchas prácticas de hoy en día, como el cooperativismo. En el caso del movimiento *punk* ha estado presente, desde el inicio, como un valor clave de su comunidad. Discos, conciertos, giras de bandas extranjeras (por decir los ejemplos más básicos) se han hecho por la ayuda mutua, en cooperación sin mando. Pero se han dado expe-

riencias más complejas, como la gestión de huertos urbanos, centros culturales y casas ocupadas que nos han ratificado que la colaboración ha sido mejor que la competencia.

2. La autogestión: básico para el DIY, como canta la banda venezolana Apatía No: «Los demás no lo harán por ti, hazlo tú mismo/a». Generando nuestros propios recursos, con las herramientas a nuestro alcance, y con la cooperación de muchos y muchas, se han hecho cosas increíbles. Aunque no ha sido una propuesta de autogestión generalizada (como la que promueve el anarquismo), el DIY *punk* ha sido eficiente en autogestionar el llamado tiempo libre, o las actividades recreativas y culturales que complementan el esfuerzo que dedicamos a la producción y el salario. Aunque muchos han usado el DIY como un trampolín para los medios masivos de difusión cultural, seguirán existiendo experiencias que nos recuerdan lo que canta Eterna Inocencia: «El panorama cambia, si vas sincerando vos, todo tiene otro sabor ¡aunque muchos no puedan comprender!».

3. La experiencia (o la existencia) por encima del lucro: en la autogestión parcial que hablábamos antes la mayoría de los implicados e implicadas en la comunidad HTM *punk* tienen trabajos asalariados con horarios, algunos más gratificantes que otros. Financiándolos de sus propios bolsillos, invierten tiempo y dinero en proyectos contraculturales, que en el mejor de los casos generan excedentes para la autosustentación y para continuar con los proyectos andando. No es el lucro lo que motiva, sino vivir la propia experiencia de mantener nuestro ocio y recreación en parámetros diferentes a los establecidos. Y sí, hay mucho «comerciante del *punk*» hacien-

do dinero de los *revivals* de las viejas bandas, pero quien está dentro sabe diferenciar esos negocios de lo que hace la comunidad *punk* contracultural. Puede ser efímero, o durar un montón de años, pero la relación cara a cara que demanda la experiencia HTM, por la confianza en las conexiones que eso supone, da un tipo de placer que no paga ninguna cantidad de dinero.

4. La reivindicación del yo por encima de la masa: ser nosotros y nosotras mismas, hacer lo que nos gusta, independientemente de lo establecido. Los Autopsia de Perú cantaban por ello *Mayoría equivocada*. Muchos de los deseos individuales promovidos por el *punk* en medio siglo, que eran antagónicos a la cultura dominante en 1977, terminaron contribuyendo al cambio político y cultural con el paso del tiempo, como el vegetarianismo, la lucha por la liberación animal, las identidades no binarias y el feminismo. Esta valía de la persona individual hizo del *punk* un movimiento incluyente, donde cualquiera tenía la potestad de participar y aportar (incluso si era rechazado por otros *punks*). Hoy, cuando las ideologías políticas de izquierda y derecha están en crisis, predominan las identidades y demandas particulares. Pero esto siempre ha sido parte del sustrato del movimiento *punk*.

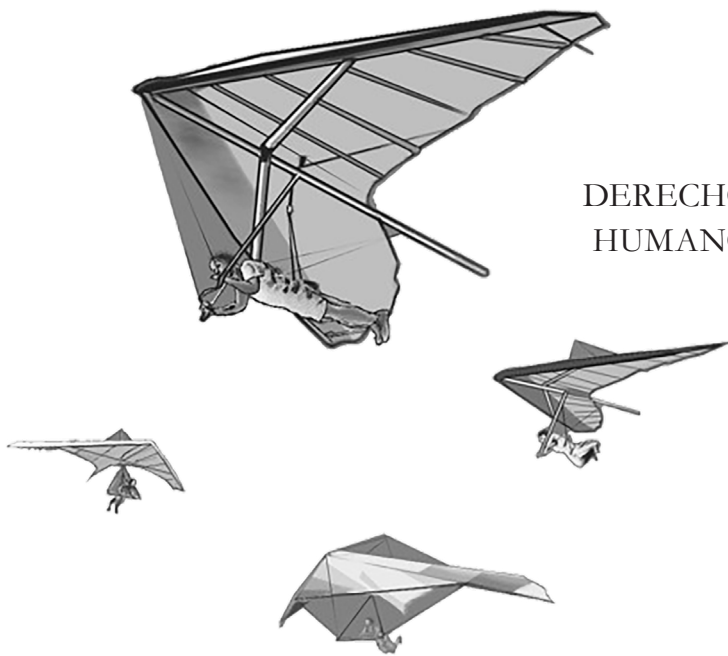
5. La precariedad como virtud: expresarse con las herramientas a nuestro alcance, aunque fueran limitadas, y especialmente si no éramos virtuosos o artistas de nada. El *punk* estaba en el propio acto en sí, así fueran tres acordes repetidos hasta el infinito o un *collage* fotocopiado y escrito a mano. Lo importante siempre fue la actitud. En contextos de limitación como el latinoamericano, el *punk* siempre fue el método perfecto

para hacer mucho con poco. Especialmente si eras la persona más impopular o introvertida de la clase.

Muchos cuarentones y cincuentones, que crecieron con el *punk*, han llevado este método a otras áreas de su vida. Para quien tuvo la curiosidad de ver lo que había más allá de la estética y los cuatro acordes, el *punk* le cambió —o le salvó— la vida. Esto es lo que creo sigue teniendo vigencia medio siglo después.

Publicado en noviembre de 2023

DERECHOS
HUMANOS



ACTIVISTAS Y DEFENSORES 2.0: SOBRE LA CRISIS EN EL MOVIMIENTO REGIONAL DE DD.HH.

No recuerdo la fecha con exactitud, pero alrededor del año 2012 me encontraba en São Paulo, invitado por una conocida organización de derechos humanos, en un evento cuyo eje temático consistía en la crisis en Zimbabwe. Solidaridad Sur-Sur la llaman. Como un añadido a la agenda, la coordinadora de esta ONG propuso un almuerzo temático para conversar sobre el debilitamiento del sistema regional de protección a los derechos humanos. Traduzco: desde diferentes Gobiernos de la región, y algunos poderes fácticos, se desarrollaba una campaña y variadas gestiones para debilitar la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, especialmente esta última, y limitar aún más su capacidad de protección a las víctimas. Asistí entusiasmado al ágape, pues me parecía una oportunidad de oro para poner sobre la mesa el liderazgo que ejercía el Gobierno de Hugo Chávez en las estrategias de desprestigio de esos organismos. De hecho, ya había anunciado su intención de realizar la denuncia de la Convención Americana, el primer paso administrativo para retirar al país de sus competencias. Levanté mi mano para pedir la palabra. Cuando me tocó el turno describí lo que estaba sucediendo en Caracas sobre el tema. La directora de aquella

prestigiosa ONG, luego, me respondió breve y directamente: «eso no va a pasar». Con el tiempo, sin embargo, sí sucedió: Hugo Chávez falleció en el 2013 y, como parte de su legado, Venezuela quedaba fuera de la mayoría de los contrapesos de estos organismos subsidiarios de la OEA, lo que dejó en orfandad a decenas de víctimas de violaciones a su dignidad.

Aquella negación de lo evidente, aquel tajante «eso no va a pasar», se ratificó con la débil reacción de las organizaciones latinoamericanas de derechos humanos frente a lo que sentaría un precedente negativo para el conjunto, siendo todas habituales de los períodos de sesiones de la CIDH para ventilar sus casos y esperar respuesta de los Estados. ¿Qué ocurría para que frente a la amenaza común no se despertara el espíritu de cuerpo? La respuesta es que muchos notables voceros de derechos humanos, a lo largo y ancho del continente, habían privilegiado su identidad política «de izquierdas» sobre su papel como defensores de los derechos humanos. Y que por tanto la existencia de Gobiernos progresistas había despertado, por un lado, sus entusiasmos, pero por el otro, relativizaba el principio de universalidad de la dignidad humana. Éramos testigos de una crisis en la comunidad de organizaciones de derechos humanos en América Latina.

Activistas contra defensores

Al igual que la propia Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), su documento fundacional, el movimiento de derechos humanos latinoamericano es un joven de setenta años. Su período de expansión coincidió cronológicamente con los días de la Guerra Fría y la resistencia contra las dictaduras militares en América Latina, algunas de ellas

apoyadas por Estados Unidos. Aquellas urgencias motivaron que, además de la estrategia de «nombrar y avergonzar», los primeros promotores sudacas de los derechos humanos se enfocaran en temas como la desaparición forzada, la tortura y la libertad de expresión. Con el tiempo se lograron que los Estados promovieran marcos normativos e instituciones, locales e internacionales, que aterrizaran los postulados de la DUDH, lo que posibilitó que los victimarios comenzaran a temer ser enjuiciados y condenados por sus actuaciones. Aquello fue recorrer caminos sinuosos, perseverar y vencer obstáculos por personas que tenían sensibilidades religiosas o de izquierda. La ola democratizante que arrojó al mundo entero a comienzos de la década de los noventa, generó condiciones para que el respeto a los derechos humanos fuera uno de los grandes valores heredados al siglo XXI.

Existen dos maneras de abordar la defensa de los derechos humanos: reconociendo o no su universalidad, «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos». Este es el parteaguas que divide a los activistas de los defensores de derechos humanos. Un activista ha decidido, deliberadamente, dedicar sus esfuerzos solo a una parte de la realidad, a un tema o a un grupo específico e identificado de beneficiarios. Por ello hace una discriminación consciente, y que en sus propios términos es legítima: su solidaridad es direccionada y focalizada, por capacidad y deseo, a quienes estima como pares. Para el caso de las organizaciones políticas ideológicas, un activista responderá, únicamente, por aquellos que le son próximos y afines. En contraste, un defensor o defensora de derechos humanos tiene vocación de totalidad y está obligado, por su condición y por tener como guía los principios de la DUDH, a la solidaridad con todos y cada uno de los afecta-

dos. Aunque un defensor ejerce sus derechos políticos y tiene sus propias afinidades ideológicas, su identidad como tal siempre será la privilegiada para interpretar lo que pasa en el mundo, incluso y especialmente para cuestionar las opciones por las que votó en las elecciones. Aunque no todos los activistas son defensores de derechos humanos, todos los defensores utilizan herramientas propias del activismo. La manera cómo piensa un defensor es de tal impacto, que usualmente el trayecto de roles es evolucionar de activista a defensor de derechos humanos, difícilmente, al contrario.

El problema para ese 2012, tiempos de «eso no va a pasar», era que varias de las principales organizaciones de derechos humanos de la región estaban dirigidas por activistas y no por defensores. Por personas que miraban hacia otro lado, y demeritaban las denuncias sobre el abuso de poder en los Gobiernos con los que se identificaban, que hacían énfasis y esfuerzos para señalar los desmanes de los Gobiernos conservadores con un ímpetu que desaparecía cuando del progresismo se trataba. En los casos más extremos como el de Cuba, Nicaragua y Venezuela —las tres dictaduras de izquierda de la región—, estos activistas ataviados de defensores matizaron, relativizaron y ralentizaron las denuncias sobre violaciones y crímenes contra la humanidad, y generaron una crisis de legitimidad y sentido al movimiento de derechos humanos en América Latina. Crisis de la que se habla poco, pero que ha dejado secuelas y que ha impedido la conformación de una comunidad transfronteriza y articulada en tiempos en que los desafíos comunes, como el cambio climático o la erosión democrática en la región, lo exige.

Hay todo tipo de motivaciones para esta simulación, incluso ingenuidad política. Hay quienes encontraron en el mo-

vimiento de derechos humanos un lugar para continuar su vocación de servicio luego de decepcionarse de militancias políticas o sociales previas. Pero también hay quienes encontraron una posibilidad de azuzar la «revolución» por otros medios, de acumular fuerzas para la toma del cielo por asalto. Hay «buenismo» cándido bajo la influencia de la religión progresista, pero también hay agendas deliberadas para utilizar los derechos humanos como un trampolín, como un espacio de poder y enunciación, para crear y fortalecer realidades propias e ignorar situaciones ajenas.

Los ejemplos y consecuencias han sido tan múltiples como avergonzantes. En una reunión de una red latinoamericana contra el abuso policial, muy activa en la denuncia de la represión contra las manifestaciones en el Chile de Piñera y la Colombia de Duque, se cuestionaron las razones de quienes habían salido a protestar en Cuba en el año 2021, porque sus protagonistas eran «de derecha». Esta visión ideologizada de quienes pueden disfrutar de sus derechos humanos y de quienes no, puede ser propia del activismo, pero nunca de la defensa de los derechos humanos. Aunque hay limitaciones materiales, temporales y hasta físicas para que un defensor o defensora pueda satisfacer su vocación de totalidad, no debe dudar ni un segundo en expresar su solidaridad con quienes, independientemente de su origen, condición social, raza o forma de pensar, se han convertido en víctimas y foco del abuso de poder. Los silencios y sesgos dan argumentos para quienes cuestionan las agendas, financiamientos y legitimidad social de las ONG defensoras de derechos humanos. Y han sumido al movimiento en una de sus peores crisis luego de años de andadura, resistencias varias y victorias parciales.

Visión crítica

Para aumentar el cisma descrito, los Gobiernos progresistas de la región intentaron darle un piso teórico y conceptual a la promoción y expansión de una visión «socialista» de los derechos humanos.

En ese 2012, cuando el Gobierno venezolano contaba aún con una importante capacidad financiera como consecuencia de la «década de los *commodities*», cuando el aumento de los precios de los rubros energéticos en el mercado internacional favoreció a diferentes países de la región, intentó promover una institucionalidad regional paralela para la protección de derechos humanos. Para ello incitó a algo que denominó Visión Emancipadora, Crítica y Alternativa (VECA) de los Derechos Humanos, que tuvo cierto nivel de ascendencia en los activistas que dirigían organizaciones en el continente. En Caracas su principal aportación teórica fue plasmada en el libro *Los derechos humanos desde el enfoque crítico*, una recopilación de textos editado por la Defensoría del Pueblo en Venezuela, en tiempos de Gabriela del Mar Ramírez. De ese libro, cito: «Solo la sociedad socialista, en tránsito hacia la sociedad comunista, puede garantizar el cabal ejercicio de los derechos humanos y ciudadanos». Como tal espíritu se repite en el conjunto de los autores, en aquel momento alertamos: la VECA es el eufemismo para la lectura marxista sobre los DD.HH., que en los tiempos posideológicos que vivimos no se atreve a presentarse como tal.

La VECA se alimentaba de varios postulados que resonaban en los tímpanos de los activistas: La OEA había funcionado y funciona bajo el amparo de los Estados Unidos y, por tanto, también sus propios entes de protección a DD.HH.

Tanto la Comisión como la Corte Interamericana tenían debilidades que respondían a fallas estructurales. Los derechos humanos han sido hegemonizados por personas e instituciones liberales. El desarrollo de las garantías para el disfrute de los derechos civiles y políticos fue posible por la minusvalía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Los individuos y sectores privados deberían también ser señalados como violadores de derechos humanos. Las agencias de cooperación, como Open Society, eran parte de una conspiración internacional contra Gobiernos progresistas y dictaban la agenda de trabajo de las organizaciones nacionales. EL mayor peligro de esta teorización es que intentaba posicionar que todos, incluyendo personas y empresas privadas, éramos potenciales violadores de los derechos humanos, y le restaban centralidad y responsabilidad al Estado. Si todos somos culpables, finalmente nadie lo es. El objetivo era vaciar de contenido, hasta la banalización, la acusación de violaciones de derechos humanos que apuntaban a Gobiernos como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Lo curioso es que varios teóricos de la VECA eran a su vez funcionarios del Estado y «defensores de los derechos humanos» sin la ruborización alguna de conflictos de intereses.

Como todo en Venezuela, luego del derrumbe de los precios de exportación del petróleo y el gas, la VECA se desinfló. Se acabó el dinero para los salarios, talleres y publicaciones. Sin embargo, algunos de los ecos persisten en el continente, algunos de ellos incluidos dentro de la llamada «teoría decolonial».

No hay derechos humanos «de izquierda» o «de derecha» porque sus principios se abstraen de la diatriba ideológica y se posicionan desde otro lugar. Existe su uso instrumental,

no solamente por parte de los Gobiernos, sino de quienes quieren apropiarlos como parte de su franquicia partidaria o su proceso particular y personal de conquista de espacios de poder, simbólicos o reales.

Las oleadas de Gobiernos progresistas pasaran, dejando tras de sí sus promesas incumplidas y expectativas insatisfechas. La lucha por los derechos humanos, de todas y todas, continuará. En ese viaje sin retorno, la comunidad de defensores deberá sortear sus desafíos comunes, e incluir la debilitación del principio de universalidad por quienes, desde la familia, tenían una mirada parcial e ideológica de la realidad.

Texto inédito para este libro

DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICA

1. «Política» se ha convertido en una mala palabra entre nosotros, algo que describe una supuesta actividad realizada con oscuras intenciones. Los venezolanos y venezolanas nos encontramos agotados y cansados por el contexto-país, que no se detiene en su deterioro. Las expectativas por lograr el cambio del estado de las cosas no se han cumplido y, en nuestra frustración, responsabilizamos a los políticos por esta situación. Si bien se han incurrido en muchos errores en la conducción del movimiento democrático por parte de los partidos políticos, también es cierto que ellos y nosotros nos hemos enfrentado a una situación desconocida: el progresivo desmontaje de la institucionalidad democrática. Y frente a esta situación inédita no hemos usado las herramientas y estrategias más eficaces para lograr el retorno de la democracia. Estos tropiezos del liderazgo democrático han aumentado, entonces, nuestra desconfianza tanto sobre la política como sobre los políticos.

Sin embargo, la palabra «política» no solo describe la actividad que hacen las personas dentro de una organización doctrinaria que busca el ejercicio del poder. La «política» es cualquier cosa que hacemos las personas para influir sobre nuestro entorno y generar cambios en el actual estado de co-

sas. Y si la política realizada por una persona es importante, cuando un individuo se asocia con otras para tener mayor capacidad de influencia, es mucho más eficaz. Siendo así, desde esta perspectiva amplia, «política» es todo aquello que hacemos las organizaciones de la sociedad civil para el logro de nuestros objetivos, aunque no queramos ejercer un cargo público. Si intentar provocar cambios, en nuestro caso en positivo, es el objetivo de la política. Tenemos que reconocer que todos nosotros y nosotras podemos hacer, y efectivamente hacemos, política en algún momento de nuestra vida.

2. Si la defensa y exigencia de nuestros derechos humanos es un acto político en sentido amplio, aunque no político-partidista, podemos pensar que el desprestigio de la palabra política también afecta el alcance de nuestros objetivos, que son la vigencia plena de los derechos reconocidos en la Constitución y la garantía de otros nuevos. Y esto es tan real que una de las metas de los Gobiernos populistas autoritarios, como el que ahora tenemos en nuestro país, es que la sociedad toda desconfíe de sus potencialidades, de su capacidad de asociarse y resolver sus problemas autónomamente. Es decir, que los ciudadanos hagan política. Y si la sociedad piensa que es incapaz, por sus propios medios de aportar a la solución de los problemas que afectan su vida, estará más dispuesta a entregarle esa responsabilidad a una persona, el caudillo o el representante máximo del Estado. Estaría, por tanto, siendo disciplinada para la delegación. Desde 1999 hemos sido testigos de cómo todo el aparato de propaganda gubernamental ha construido un culto a la personalidad, en Hugo Chávez primero y después, aunque en menor medida, sobre Nicolás Maduro, para convencernos de que disfrutar de salud o acce-

der a una vivienda no es un derecho, sino una concesión, casi un favor. Entonces, durante todo el ejercicio del poder del Gobierno bolivariano ha existido una estrategia sistemática para quitarle capacidad a la gente y entregárselo a sus élites, a la cúspide del Gobierno. Y aunque esto puede ocurrir mediante mecanismos violentos y de coerción, es mucho más eficaz cuando son consecuencia de la servidumbre voluntaria, cuando cada uno de nosotros piensa que la política es sucia y corrupta por naturaleza y, por tanto, para no ensuciarnos, delegamos y entregamos todo a la élite gubernamental.

Resumimos: es cierto que miembros de partidos políticos han incurrido en hechos de corrupción y, en diferentes ocasiones sus organizaciones no tienen mecanismos democráticos de toma de decisiones. Pero el desprestigio de nuestra potencialidad de asociarnos para resolver problemas, de hacer política en sentido amplio, es una política de Estado del autoritarismo, con el objetivo de mantener dividida y fragmentada a la sociedad, y que sea incapaz de modificar el actual estado de las cosas.

3. Los venezolanos nos encontramos en el peor momento de nuestra historia, por lo menos la que ha transcurrido desde 1958. La ausencia de democracia y la emergencia humanitaria compleja se han agravado durante la situación de pandemia. Al ser un momento extraordinario en nuestra vida, por tanto, demanda también que como ciudadanos hagamos más que lo que, en circunstancias normales, hacemos. Esta reflexión no es fácil. En nuestro caso tuvimos muchos años conversando sobre ello, estimulados por nuestros colegas del movimiento de derechos humanos del Perú, que debido a su experiencia bajo Alberto Fujimori en los noventa, un Gobierno que llegó

al poder mediante el sufragio y posteriormente se transformó también en una dictadura, desde muy temprano nos compartieron lo que aprendieron durante esos días. Desde los primeros signos de la deriva autoritaria bolivariana ellos nos decían, de diferentes maneras, que cuando en un país ocurre un quiebre de la institucionalidad democrática, las organizaciones de derechos humanos deben asumir una función política. Un papel político en sentido amplio, como hemos venido explicando, no político-partidista. Y esto consiste, en pocas palabras, en sumar esfuerzos con otros sectores de la sociedad para lograr que retorne a la democracia. Esto nos exige, en nuestro caso, hacer más que lo que usualmente hacemos. Y seguramente contamos con recursos limitados y ya estamos desbordados de exigencias. Pero, lamentablemente, la gravedad de la situación lo amerita.

Como nos lo explicaron nuestros colegas peruanos, este trabajo político, en mayúsculas, no es solamente sumarnos a los esfuerzos que ya existan de articulación por el regreso de la democracia. También, si es necesario, convertirnos en actores clave en la apertura de nuevos espacios de confianza que permitan al resto de los sectores ponerse de acuerdo. Aunque se han visto casos, generalmente quienes participamos en una ONG o en una organización social o comunitaria no tenemos vocación de ejercer el poder en un cargo público, Y esto nos otorga un nivel de reserva moral que pudiera darnos la legitimidad de convocar o reforzar espacios de articulación, cuando por el desgaste del conflicto pareciera que no fuera posible que los representantes de los partidos políticos pudieran actuar juntos. Porque cuando un ciudadano o ciudadana interviene en los asuntos públicos, es decir, hace política, no quiere sustituir el papel del liderazgo partidista, sino precisa-

mente generar las condiciones para que puedan cumplir de manera correcta con su trabajo de gestión de lo público.

4. Hacer política desde una organización social o comunitaria tiene sus riesgos. El más importante es no mantener la separación entre política en sentido amplio y política partidista, con el riesgo de que la identidad ideológica o partidista termine por sustituir o sobreponerse a nuestra identidad como activistas o defensores de derechos humanos. Para poder mantener los campos claramente delimitados, debemos actuar siempre en base a nuestros principios. En el caso de los defensores y defensoras, los principios en derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad son los más importantes. Nuestra manera de pensar y razonar debe ser, en todo momento, desde los lentes de los principios en derechos humanos. Desde este enfoque aportaremos al conjunto de esfuerzos por el rescate de la democracia, que son realizados por miradas desde otros lugares y bajo otras prioridades.

Aclaremos que desde los derechos humanos se pueden hacer dos tipos de esfuerzos: el del activista y el del defensor. Un activista, en este caso, decide defender los derechos humanos de un sector o de un grupo de personas, la mayoría de las veces de la organización a la que pertenece o de quienes les son afines ideológicamente. Por tanto, decide racionalmente no defender los derechos de un determinado grupo de personas. En cambio, un defensor o defensora de derechos humanos debe defender a todos, sin ningún tipo de discriminación, en virtud del principio de universalidad. Está obligado a ser solidario sin mirar a quién. Para ejemplificar podemos decir que Alfredo Ruiz, en su papel como Defen-

sor del Pueblo, solo defiende los derechos de quienes 1) se identifican con el chavismo y 2) apoyan, o por lo menos no critican al Gobierno. Por tanto, es un activista de derechos humanos. No es un defensor. Los activistas son necesarios, pero cuando se dice que uno es un defensor, se debe actuar coherentemente.

Por otro lado, un defensor o defensora de derechos humanos, en el ejercicio de sus derechos políticos, puede simpatizar o estar inscrito en un partido político determinado. Sin embargo, en todo momento, su principal identidad es la de ser un defensor o defensora de derechos humanos, por lo que no dudará ni un segundo en defender los derechos de quienes adversan a su partido, o tampoco debe titubear en denunciar las violaciones de derechos humanos en las que se encuentren involucrados los funcionarios que representan al partido de su preferencia. Esto es actuar siempre guiado por los principios y no por las preferencias políticas. El día de mañana los defensores y defensoras de derechos humanos deberán defender, por ejemplo, el derecho a la defensa y al debido proceso de Nicolás Maduro en caso de que deba responder por sus actuaciones frente a un tribunal. No es una tarea fácil, pues los defensores también somos humanos, pero para no flaquear en nuestro trabajo siempre debemos aferrarnos a los principios y valores presentes en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

5. Desde la sociedad civil hemos aprendido, paulatinamente, a hacer política sin comillas. El promover una identidad propia en medio del conflicto nos ha obligado a cuestionar el chantaje unitario y hacer cuestionamientos a las diferentes autoridades cuando ha sido necesario. Tampoco ha sido

sencillo y hemos tenido que extraer para ello, enseñanzas de nuestros propios errores y silencios. Luego de tantos años de hacer causa común contra el autoritarismo, un hito importante de este ejercicio autónomo de política en sentido amplio fue cuando se interpeló la instrumentalización de la ayuda humanitaria, en febrero de 2019. Eso nos dio la suficiente autoestima para rechazar, a su vez, el llamamiento insurreccional en las inmediaciones de La Carlota, meses después. Cuando llegó la pandemia a nuestro país no había vuelta atrás en la práctica autonómica, por lo que se les exigió a las diferentes autoridades que colocaran en primer plano el bienestar de la población e hicieran un alto en el conflicto para orquestar la mejor respuesta posible al coronavirus. Recientemente, a pesar de que era impopular, un sector de la sociedad civil siguió siendo fiel a sus principios sobre la resolución pacífica y negociada del antagonismo y fue clave en la designación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Seguramente se cometerán otros errores, pero quienes desde la ciudadanía han comenzado a hacer política en sentido amplio, han decidido asumir en primera persona las riendas de su destino.

6. Actualmente, existe una importante crisis de representatividad en la población, la cual desconfió que los voceros políticos opositores puedan lograr el retorno de la democracia y la vigencia plena de la Constitución. El autoritarismo piensa que neutralizando a la clase política detendrá, por otra parte, los ímpetus de promoción de la transición a la democracia. En este esfuerzo, los ciudadanos y quienes participamos en organizaciones sociales y comunitarias tenemos una función que cumplir, por lo que, si nos asociamos para actuar políti-

camente, estos esfuerzos por volver a la democracia seguirán por diferentes vías. Queremos que la clase política se recomponga, reflexione sobre sus errores y limitaciones y finalmente ejerza su papel. Pero anhelamos que eso sea acompañado, e incluya, al resto de la sociedad, mediante canales de participación incluyentes y democráticos. Hoy, tenemos que recoger testimonios y documentar violaciones de derechos humanos, realizar informes para remitirlos a los organismos internacionales de protección y hacer denuncias públicas. También tenemos que hacer trabajo humanitario, ayudando a las personas que más lo necesitan en este momento. Pero además de esos esfuerzos, que seguramente ya consumen muchas de nuestras energías y recursos, debemos ponernos de acuerdo con otros sectores, que incluyen a la clase política, para poder recuperar la democracia, el único sistema de gobierno que puede garantizar el disfrute y ampliación de los derechos humanos. Otros países de la región han pasado por situaciones tan traumáticas como la nuestra. Los venezolanos no somos menos, y tenemos tanta capacidad humana como ellos para lograr, en un futuro, un país para todas y todos. Que este tipo de preocupaciones sea cada vez más, de interés público es un pequeño ejemplo de ello.

Publicado en junio 2021

INTERVENCIÓN MILITAR Y CORTE PENAL INTERNACIONAL

Kathryn Sikkink es una conocida académica con perspectiva de derechos humanos radicada en Estados Unidos y profesora en Harvard y la Kennedy School of Government. Su más reciente libro sobre el tema, *Razones para la esperanza. La legitimidad y efectividad de los derechos humanos de cara al futuro*, acaba de ser traducido al español y publicado por la ONG colombiana Dejusticia. Entre la serie de razonamientos de interés, entre ellos el aporte del sur en el desarrollo de la doctrina internacional de derechos humanos, queremos detenernos en su opinión sobre las intervenciones militares unilaterales o multilaterales, un tema que ha ido ganando espacio en la opinión pública entre los venezolanos.

Con habilidad mediática algunos voceros e influenciadores, entre los que se cuenta alguno autodescrito como «defensor de derechos humanos», ha venido planteando la supuesta necesidad de una intervención militar en Venezuela como manera de parar las tropelías de la dictadura de Nicolás Maduro. Como en los tiempos de la posverdad no se puede llamar a las cosas polémicas por su nombre, se ha posicionado el término «injerencia humanitaria» para legitimar esta posición, ligándola a la necesidad de la apertura del canal humanitario

para recibir a corto plazo alimentos y medicinas. Citemos extensamente la opinión de Sikkink al respecto: «Debido a que las personas están preocupadas por los derechos humanos y a la vez son pesimistas sobre la efectividad de las herramientas legales y de política ordinarias, a menudo solicitan el uso de la fuerza militar para prevenir atrocidades masivas». En nuestro caso, esta declaración de impotencia, solicitar una intervención militar extranjera, es en parte consecuencia de las limitaciones de los mecanismos internacionales, como la Carta Democrática Interamericana, para impedir la cadena de abusos por parte del oficialismo venezolano. En otras latitudes se intenta dar piso argumentativo a esta exigencia, lo que explica la académica de la siguiente manera: «Esto ha conducido a alguna combinación injustificada entre derechos humanos y lo que se llama “la responsabilidad de proteger” (R2P en inglés), una doctrina en tres partes que esencialmente redefine la soberanía como una responsabilidad de los Gobiernos de proteger a sus propias poblaciones y de la comunidad internacional de asistir a los Gobiernos en sus esfuerzos para protegerlas. La última frase de esta idea dice que, si el Estado fracasa en proteger a su población del genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, la comunidad internacional debe estar preparada para utilizar medidas más fuertes, como el uso colectivo de la fuerza a través del Consejo de Seguridad de la ONU». Aunque la fuerza colectiva cuenta como una opción a implementarse solo como último recurso, para los usuarios descuidados del término, la R2P se ha vuelto un sinónimo de la intervención militar para promover los derechos humanos. Para algunos, la intervención militar y la promoción de los derechos humanos pudieran promoverse como dos caras de la misma moneda.

Aunque Sikkink no escribía pensando en Venezuela, sus conclusiones parecen responder a esos voceros fuera del país que claman por el apocalipsis a través de sus redes sociales: «No hay ningún tratado de derechos humanos que diga que se exhorta o incluso que se permita que los Estados utilicen invasiones militares para hacer cumplir derechos humanos (...) El uso de la fuerza militar para propósitos de paz y seguridad internacional se consigna en la Carta de las Naciones Unidas, no en los tratados de derechos humanos». Para dejar clara su opinión, agrega: «La intervención militar es un instrumento poco aceptado que, más que calmar la atrocidad masiva, la potencia». Citando investigaciones, y con la invasión a Irak en mente, concluye: «Algunos estudios encontraron que la intervención militar ni mejoraba los derechos humanos en el país objetivo ni contribuía a su democratización».

¿Está la comunidad internacional atada de manos frente a situaciones como la venezolana? Sikkink postula su propuesta: «Se ha visto y se debe ver a la Corte Penal Internacional (CPI) como una alternativa al uso de la fuerza militar, no como su complemento (...) Preferiría que las grandes potencias usaran su poder militar para ejecutar enérgicamente las órdenes de arresto de un tribunal internacional más que una intervención unilateral de gran escala (...) Si los países tomaran en serio las órdenes de captura de la CPI, se prevendrían atrocidades masivas; más aún, enviaría una fuerte señal disuasiva a los perpetradores futuros».

¿Es la Corte Penal Internacional la alternativa no violenta que nos queda a quienes deseamos el regreso a la democracia en Venezuela? Las organizaciones venezolanas de derechos humanos todavía estamos aprendiendo sobre la CPI antes de tener la capacidad de formular una respuesta. Lo cierto

es que otros mecanismos han mostrado su ineficacia frente a regímenes como el venezolano, lo cual nos coloca en una situación que debemos abordar en toda su complejidad y dramatismo.

Publicado en octubre de 2018

LA «POLITIZACIÓN» DE LOS DD.HH.

Desde José Luis Fernández-Shaw hasta Diosdado Cabello, todos quienes adversan el trabajo de las asociaciones independientes en el país han intentado posicionar una matriz de opinión en las últimas semanas: la defensa de los derechos humanos «se ha politizado» o, con variantes, las ONG se han convertido en «actores políticos». La afirmación intenta allanar el camino para restringir, aún más, el ejercicio del derecho de libertad de asociación y reunión en Venezuela.

Lo «político» goza de poco prestigio entre nosotros, como lo sugiere nuestra actual crisis de representación. El populismo necesita reforzar que la construcción de consensos —precisamente el área de la acción política en mayúsculas— no solo es ineficaz sino corrompible, y que, por tanto, hay que seguir apostando a su contrario, el autoritarismo del partido o del caudillo. Por ello una buena manera de intentar desacreditar cualquier acción ante la ciudadanía es sugerir que usted, o yo, tenemos «motivaciones políticas».

En el caso que nos ocupa luego de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948, se hicieron muchos esfuerzos por dar a conocer lo que aquello significaba. Las primeras organizaciones de derechos humanos en la región, y que incluían a Venezuela, comenza-

ron su trabajo dedicando buena parte de sus primeros años a educar y difundir tanto sobre lo que era el concepto como sus responsabilidades estatales derivadas. Luego de la caída del Muro de Berlín y el agotamiento de la confrontación ideológica izquierda-derecha, los derechos humanos comenzaron a popularizarse como los principios con mayor influencia para alcanzar una vida con dignidad para todos y todas las habitantes del planeta. Acelerado por la revolución tecnológica informacional de la globalización, la palabra se convirtió en un término políticamente correcto en la cultura, sociedad y en las relaciones multilaterales. Empero, aquello no ocurrió fortuitamente: fue también consecuencia de un activismo deliberado que deseaba colocar aquello en boca de todos. Entonces, que un dirigente o miembro de un partido determinado lo aluda no puede ser interpretado negativamente sino todo lo contrario: como un triunfo del movimiento de derechos humanos, incluso a las víctimas de vejaciones, que lograron posicionarlo en el debate público.

Catalina Fernández Botero, en su libro *Los límites de la fuerza. Mitos y verdades sobre los derechos humanos*”, afirma: «Los DD.HH. no son patrimonio de ningún sector político. Sin embargo, ello no significa que no sean políticos: al referirse a la relación entre los individuos y el Estado, el concepto es eminentemente político». Más adelante, agrega: «¿Cómo no van a ser políticos los derechos humanos si son las garantías que nos permiten la participación política? ¿Cómo vamos a “despolitizar” la pregunta sobre los límites de la actuación del Estado y las protecciones que tienen los ciudadanos? Pedir que el debate sobre derechos humanos no esté cruzado por la política es tan absurdo como pedir que el debate sobre la

Constitución —la autora escribe desde Chile— no sea político. No puede sino serlo».

En el más bienintencionado de los casos, la supuesta acusación sobre la «politización de los derechos humanos en Venezuela», el único país del continente sujeto a una investigación en marcha por la Corte Penal Internacional es curiosa. No dejo de pensar que su verdadera motivación es ideológica —o afectiva, casi lo mismo—. El problema es cuando quienes percibimos como «los otros» —los conservadores o cualquiera fuera de la constelación progresista— lo invocan como parte de su crítica frente a lo que nos es más cercano. Por ejemplo, las organizaciones políticas y sociales que finalmente llegaron al poder en Colombia con Gustavo Petro siempre acusaron a liberales y conservadores sentados en el Palacio de Nariño de ser violadores de derechos humanos, un señalamiento que, correctamente, se extendió por el mundo. Y que recuerde, nunca escuché a nadie decir que el tema de los derechos humanos en el hermano país «se había politizado». En Colombia, Venezuela, o en cualquier nación del globo, las violaciones de derechos humanos van a ser parte de la narrativa de la oposición, independientemente de su color. La manera de disminuir y neutralizar las críticas al respecto es que las autoridades nacionales promuevan, de manera genuina, políticas para investigar las violaciones, reparar a las víctimas y establecer mecanismos de no repetición de los hechos. En el caso venezolano, un país sin democracia y con emergencia humanitaria compleja, las autoridades han continuado sirviendo el tema en bandeja a todos sus críticos.

El esfuerzo que intenta instalar en el imaginario dominante entre nosotros que la defensa de los derechos humanos o las ONG son «políticas» no es una deriva academicista o

un asunto de interpretaciones. La Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, aprobada en el año 2010, tiene una serie de restricciones y penalizaciones para las «organizaciones con fines políticos». Su artículo 3 establece claramente lo que el chavismo realmente existente entiende bajo esa denominación: «Aquellas que realicen actividades públicas o privadas, dirigidas a promover la participación de los ciudadanos o ciudadanas en los espacios públicos, ejercer control sobre los poderes públicos o promover candidatos o candidatas que aspiren ocupar cargos públicos de elección popular». Esta normativa se complementaría con las que se encuentran actualmente en discusión en la Asamblea Nacional –Proyecto de Ley de Cooperación Internacional y el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. El apetito autoritario no se saciará únicamente contra las ONG o sus beneficiarios y beneficiarias. Como demuestra el ejemplo nicaragüense el objetivo es disciplinar al conjunto de la población, al limitar al mínimo sus capacidades autonómicas de asociarse, de manera libre, con quien desee para transformar su realidad y tomar las riendas de su destino.

Publicado en marzo de 2023

EL FANZINE COMO DISPOSITIVO DE MEMORIA

La memoria, incluyendo la de violaciones de derechos humanos, necesita de soportes físicos que la conserven del paso del tiempo y que además permitan compartirla con otras personas. Si bien los archivos digitales cumplen una importante función en la difusión y socialización, los servicios de limpieza de reputación en internet —usados por funcionarios y Gobiernos— pueden atentar contra su acceso permanente. Por otro lado, en un país como el nuestro un sector importante de la población o no tiene acceso permanente a internet o es víctima de cortes reiterados de servicios básicos como la electricidad o la telefonía digital. Por ello, seguir publicando formatos físicos es una decisión tanto estética como política.

Varias ventajas colocan al fanzine como un primer ejercicio editorial, al alcance de cualquiera, para dejar constancia de lo que pasó. En primer lugar, su capacidad de ser elaborado de manera artesanal si se desea, con originales hechos con *collages* y textos escritos a mano, lo convierten como una opción para quienes desconozcan *softwares* de diagramación por computadora. En segundo lugar, su bajo coste de reproducción. Sea a fotocopias o en otros equipos de copia por demanda, como las risográficas, se pueden realizar tiradas cortas de la

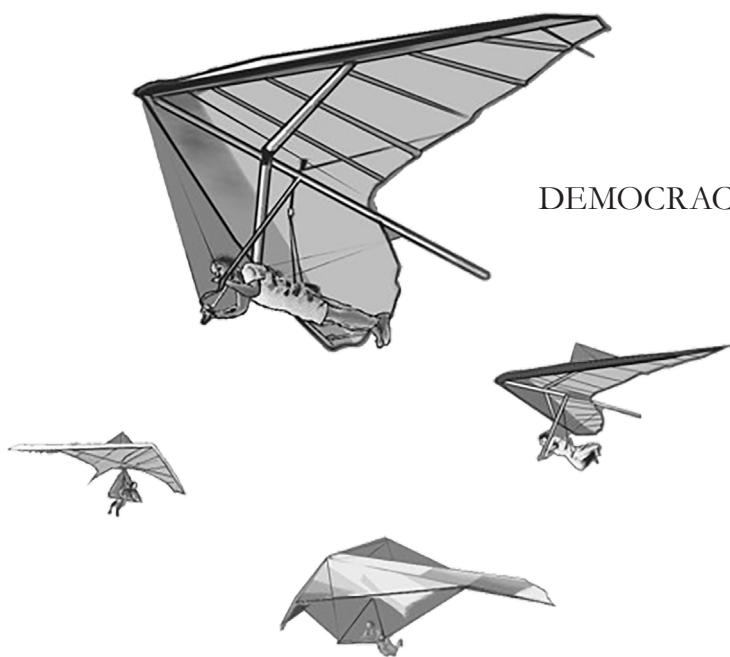
publicación según las necesidades de distribución. Finalmente, por el potencial proceso pedagógico y de cohesión de grupo que puede significar la realización colectiva de un fanzine.

Para los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos realizar una publicación donde relaten quién era su ser querido y las circunstancias en las que ocurrió el abuso de poder, puede ser el primer paso en un proceso de reparación simbólica. Para ellos la justicia, el castigo para los responsables, y que se tomen decisiones para que los hechos no se repitan, es tan importante como «limpiar» el nombre de su familiar, criminalizado por la versión oficial y la ampliación de medios de comunicación. Realizar un fanzine, donde se describa y se plasmen los anhelos de quien ha sido abusado por el Estado, pudiera unir a un familiar con otros afectados por la injusticia, mitigando el dolor y reivindicándolo frente al resto de la sociedad.

Un fanzine puede ser, entre muchas otras cosas, también una terapia medicinal.

Texto inédito

DEMOCRACIA



POPULISTAS SIN APOYO POPULAR

Los populistas latinoamericanos llegan al poder a través de las elecciones. Cuando pierden el apoyo popular, transforman su autoritarismo electoral en autoritarismo a secas. El caso venezolano es un ejemplo.

Miguel tiene sesenta años y está jubilado del Metro de Caracas, donde trabajó durante treinta. En 1987, cuatro años después de la inauguración de este sistema de transporte masivo, comenzó a funcionar su red de autobuses, el Metrobús. Allí trabajaría sindicalmente un joven activista de izquierdas llamado Nicolás Maduro. Miguel condujo un Metrobús durante tres décadas y, aunque no conocía personalmente a Maduro, en 1998 votó por primera vez a Hugo Chávez. En las siguientes elecciones, las declaraciones directas de Chávez —por ejemplo, «ser rico es malo»— motivaron a Miguel y al resto de su familia a repetir esa selección.

Sin embargo, en 2017, ese entusiasmo se había convertido en decepción. Ante la falta de oportunidades, su única hija —el centro de su mundo— decidió salir del país con su esposo e hijo como migrante forzada. Y como si esa separación no fuera suficiente, tras una nueva devaluación del bolívar, la moneda local, su jubilación por todos sus años de servicio sumó sesenta dólares. Mientras sus compañeros criticaban en

voz baja los privilegios de los directivos de la empresa, llamándoles «boliburgueses», Miguel abandonó sus sueños de hacer un viaje con su mujer y montar su propio negocio. A partir de entonces, empezó a desarrollar un resentimiento silencioso.

Rebelión popular

La historia de Miguel es común en la Venezuela de 2024. Aunque Hugo Chávez nunca obtuvo los diez millones de votos que anunciaba en cada campaña electoral, hasta la fecha de su muerte contaba con el apoyo de la mayoría de la población. Para ello, el llamado «izquierdista de Sabaneta» contaba con su gran capacidad comunicativa y unos extraordinarios ingresos estatales procedentes de los altos precios de los principales productos de exportación del país, el petróleo y el gas, en los mercados internacionales. El economista Manuel Sutherland calcula que entre 1998 y 2015 los ingresos petroleros venezolanos fueron equivalentes a diez Planes Marshall. Aunque no hubo transformaciones estructurales de las causas de la desigualdad, la combinación de carisma y dinero a repartir reforzó los lazos de lealtad política durante décadas. Su muerte coincidió con el final de la «década de las materias primas», que desplomó los ingresos públicos e inauguró tiempos de crisis económica.

Tras la muerte de Chávez en 2013, el Gobierno organizó rápidamente unas elecciones para capitalizar políticamente el proceso de duelo. El resultado fue inesperado: aunque ganó Nicolás Maduro, obtuvo un millón de votos menos que Chávez, con un margen de diferencia sobre la oposición de solo el 1,7 %. Se podría especular qué habría pasado si la figura

central del bolivarianismo hubiera seguido con vida, pero lo cierto es que en las siguientes elecciones a la Asamblea Nacional se confirmó una tendencia a la baja de la popularidad en todo el partido.

En diciembre de 2015, el oficialismo obtuvo dos millones de votos menos que la coalición opositora. Convertido en minoría social y electoral, el chavismo decidió cruzar la última bandera roja de la democracia en octubre de 2016, y suspendió el referéndum revocatorio y las elecciones regionales previstas para diciembre de 2016. El cierre de los canales institucionales de resolución de conflictos dio paso a la confrontación. Entre abril y agosto de 2017 se produjeron las manifestaciones más importantes —en términos de duración, cobertura geográfica y participación— de la historia contemporánea de Venezuela.

Una evidencia adicional de la crisis de popularidad del chavismo ocurrió en diciembre de 2023. El Gobierno convocó un referéndum consultivo sobre el conflicto de Venezuela con Guyana por el territorio del Esequibo. Se trataba de una respuesta política a la celebración de elecciones primarias por parte del sector mayoritario de la oposición, que el 22 de octubre logró el sufragio de dos millones cuatrocientas mil personas. Aunque esto representaba el 10 % de la población total con derecho a voto, la importancia de la cifra residía en la participación registrada en territorios anteriormente dominados por el partido en el poder.

Invocando el sentimiento nacionalista, Nicolás Maduro puso a prueba su poder de convocatoria un mes después, el 3 de diciembre. «El Esequibo es nuestro» se convirtió en el lema de una campaña publicitaria de un millón de bolívares que instaba a la población a respaldar la posición oficial sobre

el tema. El Gobierno afirmó que diez millones de personas habían votado en la consulta. Sin embargo, las imágenes de colegios electorales vacíos indicaban un profundo malestar en la vieja base electoral bolivariana.

Alertas tempranas

Es cierto que líderes populistas con rasgos autoritarios llegan al poder a través de las elecciones y luego comienzan a debilitar las instituciones democráticas y la separación de poderes. Polarizando a la sociedad, manipulando las emociones derivadas de años de desigualdad e injusticia, y arrinconando a sus adversarios, estos líderes convocan elecciones, que finalmente son aceptadas por la comunidad internacional. ¿Qué ocurre cuando, tras años de hegemonía, incumplen sus propias promesas de mejorar la calidad de vida de la población y pierden popularidad?

El caso de Venezuela sugiere que transforman su autoritarismo electoral en un autoritarismo pleno que implica cierre de espacios cívicos, represión y coerción. El número de empleados públicos en Venezuela ronda los cuatro millones de personas; el chavismo siempre podría contar con esta cifra como el número mínimo de votos que podría conseguir. Por lo tanto, para poder ganar las elecciones como minoría, el partido tenía que ser capaz de dividir a la oposición. Su dilema para las elecciones de 2024 es que no sabe con certeza cuántos votantes apoyarán al partido.

En febrero de 2024, la encuesta de Datincorp estimaba que la intención de voto para Nicolás Maduro se situaba en el 15 %, con un 23 % de los encuestados diciendo que su principal sentimiento hacia Maduro era la rabia. Sin embargo, el

chavismo está organizando unas elecciones presidenciales de una forma que ha generado las críticas de sus aliados políticos Lula Da Silva y Gustavo Petro.

La historia latinoamericana está repleta de líderes mesiánicos apoyados por la población. Sin embargo, la experiencia indica que, ante este tipo de autoritarismo popular, la comunidad internacional debe estar más alerta que nunca. ¿Qué pasará cuando Maduro pierda la legitimidad del apoyo popular y su Gobierno abandone cualquier atisbo de democracia? ¿Será el camino que transiten en el futuro otros líderes como Nayib Bukele?

Publicado en febrero de 2024

VENEZUELA: CHOMSKY, CODE PINK Y EL COLONIALISMO DE IZQUIERDA

El 5 de marzo de 2019 apareció una carta pública firmada por «ciento veinticuatro académicos de todo el mundo», bajo el título «Una carta abierta a la Oficina de Washington en América Latina (WOLA) sobre su postura sobre el esfuerzo de Estados Unidos para derrocar al Gobierno venezolano». Como intentaré demostrar en este texto, esta comunicación es un buen ejemplo de un tipo de pensamiento que he llamado, provocativamente, «colonialismo de izquierda».

Para aclararlo de entrada, no considero que todos los intelectuales progresistas y activistas de Estados Unidos sufran de «colonialismo de izquierda». Al contrario, he conocido muchas personas, de ideologías de izquierda de todos los tintes, genuinamente interesadas en la situación venezolana y que, para informarse, hacen el esfuerzo de leer lo que se genera desde dentro del país, dialogar con los actores locales y apoyar sus esfuerzos.

En nuestra opinión el colonialismo de izquierda está caracterizado por cuatro ideas-fuerza:

1. Los Estados Unidos son el eje político, económico, social y cultural del mundo.

2. Sus críticas y adhesiones sobre los conflictos mundiales tienen poco que ver con la situación real de los territorios, al ser funcionales y subsidiarios de su posicionamiento sobre la política interna de Estados Unidos.
3. Para opinar sobre los conflictos del llamado «tercer mundo» optan por el «debate entre pares» y jerarquizan el conocimiento sobre ellos generado por los centros académicos del «primer mundo».
4. Las aspiraciones democráticas, utópicas o revolucionarias solo son legítimas, en toda su extensión y amplitud, para los territorios desarrollados de los países integrantes de la «matriz colonial del poder». Para el resto del planeta hay folclore.

Matriz colonial del poder: líneas de fuga

La reflexión sobre la colonialidad del poder fue impulsada, a comienzos de los noventa, por el sociólogo peruano Aníbal Quijano, en su esfuerzo reflexivo desde América Latina y sus particularidades. Según Quijano la idea de raza fue determinante para legitimar las relaciones de dominación características durante la colonia, basadas en el eurocentrismo, con tendencia a considerar a Europa como el centro de la historia y el protagonista de la civilización humana. La idea de raza supuso «una supuesta diferente estructura biológica que situaba a los unos en situación natural de inferioridad con respecto de los otros (...) Sobre esta base, en consecuencia, fue clasificada la población de América, y del mundo después, en dicho patrón de poder». Por tanto, raza e identidad racial fueron establecidas como instrumentos de clasificación básica de la población.

Quijano desarrolla tres dimensiones de lo que califica como un proceso complejo mediante el cual los colonizado-

res configuraron un nuevo universo de relaciones intersubjetivas entre el centro, que era Europa, y las demás regiones y poblaciones del mundo. En primer lugar, la expropiación de los descubrimientos culturales a las poblaciones colonizadas de lo que fuera útil para el desarrollo del centro europeo. En segundo término, la represión de las formas de producción de conocimiento de los colonizados, sus patrones de producción de sentidos, su universo simbólico, sus patrones de expresión y de objetivación de la subjetividad. Por último, la imposición del aprendizaje de la cultura de los dominadores en todo lo que fuera útil para la reproducción de la propia dominación. «Los europeos —afirma— generaron una nueva perspectiva temporal de la historia y reubicaron a los pueblos colonizados, y a sus respectivas historias y culturas, en el pasado de una trayectoria histórica cuya culminación era Europa». Los mitos fundantes del eurocentrismo serían 1) la idea-imagen de la historia de la civilización humana como una trayectoria que parte de un estado de naturaleza y culmina en Europa y 2) el otorgamiento de sentido a las diferencias entre Europa y No-Europa como diferencias de naturaleza (racial) y no de historia del poder.

A raíz de lo que Quijano describió como la «matriz colonial del poder» se ha generado una fructífera discusión que ha dado paso a un movimiento de investigación en diferentes direcciones, los denominados «estudios decoloniales». Empero, sus integrantes han enfilado el trabajo de deconstrucción hacia la racionalidad de los centros de pensamiento ubicados en el espectro liberal del pensamiento político. ¿Es posible aplicar esta metodología hacia el lado contrario, generado dentro de los centros mundiales de poder y, específicamente, Estados Unidos? Creemos que sí.

Carta abierta, mentes girando sobre su propio eje

Lo primero que hay que decir de la Carta Abierta del 5 de marzo de 2019 es que no es representativa «de todo el mundo», como asegura su introducción, sino de un sector académico que hace vida intelectual desde y en Estados Unidos. De las ciento veinticuatro firmas, por lo menos un 83,8 %, es decir ciento cuatro rúbricas, son de personas de centros académicos u organizaciones de Estados Unidos. El 4 % de los signatarios, cinco firmas, provienen de academias de América Latina. Mientras que, del territorio del tema de la discusión, Venezuela, solo hay una firma, el 0,8 % del total. Esta composición no es casual. De todas las adhesiones la firma de Noam Chomsky es la que encabeza el comunicado.

Cuando la Carta Abierta aparece, según las estadísticas de las ONG venezolanas de derechos humanos, ya habían ocurrido las situaciones más graves en la institucionalidad democrática del país latinoamericano: la imposición de un presidente como consecuencia de un fraude electoral; la salida forzosa de más de tres millones de venezolanos en un período de tiempo relativamente breve, configurando la peor crisis migratoria de la región; la más crítica situación social del país en los últimos sesenta años, con más del 46 % de las personas en calidad de pobreza y con siete millones de venezolanos dependiendo de las ayudas estatales para comer lo mínimo indispensable y, por si fuera poco, el asesinato de treinta y cinco personas por protestas en los sectores populares, un saldo de una semana de represión en febrero del 2019. Nada de esto, la situación del pueblo venezolano que debería ser el centro de las preocupaciones de cualquier sensibilidad «progresista», es nombrado en la epístola. La idea principal

del texto es refutar la opinión que sobre Venezuela ha emitido alguien considerado como un igual: una ONG radicada en Washington. Uno puede discutir el anterior énfasis, pero finalmente es legítimo dentro de las posibilidades del debate democrático y el ejercicio de la libertad de expresión. Lo que no lo es, no obstante, es simplificar la situación hasta falsear la naturaleza del conflicto venezolano, mintiendo descaradamente.

Como planteábamos al inicio sobre una de las características del colonialismo de izquierda, sus críticas y adhesiones sobre los conflictos mundiales son funcionales y subsidiarios de su posicionamiento sobre la política interna de Estados Unidos. Esta toma de postura, por tanto, es independiente de la situación concreta de los territorios sobre los cuales se opina. Si los hechos coinciden con las críticas a la influencia norteamericana en la zona de conflicto, bien. Si no, mal por los hechos: se infantiliza la explicación hasta hacerla sintonizar con ella.

La Carta Abierta orbita en torno a dos ideas principales: el Gobierno de Donald Trump está promoviendo un cambio de Gobierno en Venezuela y WOLA no está rechazando de manera contundente esta pretensión del Gobierno norteamericano. La segunda idea, realmente, es consecuencia de la primera. Por contraste de la aseveración principal, sin la intromisión de la Casa Blanca no existiría ninguna demanda de transformación en el país caribeño. Así, neutralizando a los actores norteamericanos que son percibidos como aliados de la injerencia, la iniciativa del Gobierno de Trump se debilitaría y, con ello, las presiones sobre Nicolás Maduro y su Gobierno. A los ciento cuatro intelectuales norteamericanos no les interesa realmente la situación del pueblo venezolano,

y sus propias aspiraciones —cualquiera que estas sean— sino utilizar el tema venezolano para sus propios intereses políticos: antagonizar con la administración Trump. Curiosamente, lo mismo que uno le puede criticar al actual Gobierno de Estados Unidos.

El desprecio vertical

Noam Chomsky, el intelectual arquetípico de la lista de suscriptores, ha opinado en reiteradas opiniones sobre Venezuela. Desde que el proyecto bolivariano llegó al poder en Caracas, a finales de 1998, solo ha realizado una visita, y por pocas horas, a la nación suramericana. Al ser un tema de su interés, o por lo menos uno en el que sus opiniones se realizan desde la autoridad de alguien que presume tener una mayor y mejor información que el ciudadano promedio, sus fuentes sobre la realidad venezolana no son el trabajo de campo ni los datos generados por los propios venezolanos, sino la información generada por otros intelectuales progresistas, para utilizar los códigos de Quijano, ubicados en la matriz colonial del poder. La muestra está en la cantidad de venezolanos adheridos a la comunicación.

Este desprecio a la propia producción intelectual desde el terreno, considerada como de una subjetividad inferior, lo padecí en primera persona. En el año 2009 fui contactado por una editorial anarquista de Estados Unidos, See Sharp Press, para escribir una crítica desde la izquierda al Gobierno de Hugo Chávez. En ese momento Noam Chomsky era un abierto promotor de la llamada «revolución bolivariana», así que como estrategia para intentar dialogar con el potencial lector del libro fue precisamente contradecir, con datos, las razones de su entusiasmo. El resultado fue el libro *Venezuela*

la revolución como espectáculo. Una crítica anarquista al Gobierno bolivariano, con doscientas setenta y cuatro páginas y seiscientas notas al pie de página. El editor, Chaz Buffe, lo primero que hizo al tener el impreso fue mandarle una copia al propio Chomsky, quien dio acuse de recibo mediante un e-mail en el que mostraba su disgusto por ser el autor más citado, en negativo, en el texto. ¿Qué tanto lo leyó? Por lo menos lo suficiente para reconocer la contestación a sus afirmaciones acerca del Gobierno de Hugo Chávez. Sin embargo, nada de lo que hubiera escrito, desde el propio terreno en Venezuela, hubiera sido suficiente para demostrarle al lingüista del MIT que en Caracas el cielo es azul: es rojo por culpa del imperio norteamericano. El 2 de marzo de 2019, tres días antes de la aparición de la Carta Abierta, Noam Chomsky durante una entrevista de radio repitió todas y cada una de las aseveraciones sobre Venezuela que refuté, más destañadas e imprecisas de tanto repetirlas de memoria. ¿Hubiera pasado lo mismo si yo hubiera sido un profesor universitario, de origen anglosajón, de cualquier universidad de Estados Unidos?

El falseamiento simplificador de la Carta Abierta sobre la situación venezolana es tal que el Grupo Internacional de Contacto (GIC) de la Unión Europea es descrito en dos frases: la primera «dominado por Washington» y, casi al final, «aliado del Gobierno de Trump». Se omite intencionalmente que el resto de la comunidad internacional, precisamente, está intentando hacer contrapeso al protagonismo de la administración Trump. El GIC, para la mentalidad eurocéntrica del colonialismo de izquierda, sería el único protagonista internacional válido de mencionar —que no Rusia, China o Turquía—, parte también de la misma matriz colonial del poder. Otra razón no explica la omisión sobre el Grupo de Lima

que, guste o no, ha tenido mayor protagonismo internacional que los europeos y, a nivel regional, igual que el de Estados Unidos. La calidad de la información de Chomsky y su grupo llega al punto de afirmar que se han rechazado las «ofertas de mediación del papa Francisco», algo que realmente sucedió en una mesa de diálogo ocurrida... ¡a finales de 2016!

Las críticas a WOLA, por otra parte, no solo son pobremente argumentadas sino basadas en afirmaciones falsas. Y no puede ser de otra manera. Como recordaron ciento veintitrés organizaciones y quinientos nueve académicos y activistas sociales venezolanos en otra comunicación para agradecer su trabajo sobre la crisis venezolana, WOLA —a diferencia de Chomsky y, pudiera apostar, el 90% de los progresistas estadounidenses que lo secundan— ha construido su posicionamiento en base a una presencia permanente sobre el terreno y visitas constantes al país, donde han construido una relación sólida con quienes reconocen como sus pares: las ONG de derechos humanos venezolanas. La postura de WOLA sobre Venezuela puede ser todo lo discutida que quiera, pero en base a aseveraciones empíricamente verificables.

Al actual colonialismo de izquierda, carente de una promesa de futuro, le importa poco la real situación del pueblo venezolano. Un ejemplo de ello es la organización feminista Code Pink que protagonizó una ocupación temporal de la embajada venezolana en Estados Unidos para rechazar la «injerencia imperialista», pues su problema es el Gobierno de Donald Trump y no las escandalosas y sistemáticas violaciones a los derechos de las mujeres venezolanas y de la comunidad LGBT del país, algo que ha ocurrido desde los días de Hugo Chávez y que no pudiera adjudicarse, con honestidad, a las sanciones económicas.

Repetimos lo que hemos dicho en otras ocasiones: el protagonismo de las fuerzas más conservadoras, como el Gobierno de Estados Unidos, es protagónico debido al abandono que las fuerzas progresistas internacionales han hecho de las demandas democratizadoras del pueblo venezolano. Estas exigencias necesitan soporte internacional, pero de uno que escuche con atención las demandas de los propios venezolanos para hacerlas suyas y, en el mejor de los casos, dialogar con ellas. El actual conflicto no es la supuesta confrontación entre Miraflores y la Casa Blanca, sino el antagonismo de una mayoría que desea democracia, con todas las promesas vinculadas a ella, y una minoría que hoy desde Caracas se ha transformado en una dictadura.

Publicado en junio de 2019

VENEZUELA:
CUANDO LA IZQUIERDA
DEJÓ LA CANCHA SOLA
Y LIBRE AL IMPERIALISMO

Hasta el mes de octubre de 2016 era válida una interpretación del conflicto venezolano como una disputa entre dos burguesías por imponer su modelo de dominación. En ese momento hubo una transformación estructural de la disputa, cuando el Gobierno de Nicolás Maduro decidió convertirse en una dictadura, al suspender sin base legal los procesos electorales en curso. La democracia, con todas y sus limitaciones, era el terreno de juego donde todas las fuerzas políticas y sociales podían impulsar una transformación, teniendo como herramientas esas libertades democráticas que, como sabemos, su materialización costó mucha sangre, sudor y lágrimas. Si la policía asesinaba a un compañero, podíamos denunciarlo ejerciendo la libertad de prensa y expresión y tener la expectativa de que los asesinos algún día serían castigados precisamente por esa justicia formal, con todos los adjetivos que pudiéramos endilgarle. En dictadura sencillamente había que abandonar esas ilusiones y prepararnos para la resistencia o para la dominación.

Desde ese día hicimos muchas cosas para alertar, adentro y afuera, la gravedad de lo que estaba pasando. En el 2017

fuimos parte de la multitud que en toda Venezuela se movilizó por un cambio, pagando un precio muy alto por ello, en muertos, heridos y exiliados sociales. No fue, sino hasta que los miles de venezolanos migrantes llegaron a los países de la región, que algunas organizaciones comenzaron a escuchar lo que denunciábamos. Durante mucho tiempo, pero especialmente bajo la dictadura de Maduro, las fuerzas y grupos internacionales de izquierda, salvo excepciones, nos dejaron solos, le dieron la espalda al creciente rugir del pueblo venezolano, hoy una absoluta mayoría, por una transformación del estado de las cosas. En este camino muchos de los jóvenes que protestaban en la calle no podían encontrar referentes en las izquierdas, muchas de ellas por ser cómplices en su silencio, otras abiertamente apoyando, hasta última hora, al autoritarismo y la coerción por hambre y humillación.

Luego de la muerte de Chávez y hasta enero de 2019, para muchos de los progresismos, Venezuela se convirtió en un tema incómodo, políticamente incorrecto en su deriva totalitaria. Se dejó de hablar sobre la revolución bolivariana porque la vergüenza por sus resultados concretos era tal que era mejor pasar la página. Muchos de los que callaron, conscientemente, ahora denuncian el protagonismo «de las derechas» y del «imperialismo» en la resolución del drama en nuestro país. Los mismos que dejaron la cancha sola, que nunca tuvieron la intención de salir de la camisa de fuerza de las ideologías para escuchar el sufrimiento de las personas de carne y hueso y tener una respuesta para esas demandas.

Hoy, cuando la muchedumbre está desesperada por un cambio de rumbo, que los saque de la agobiante miseria que padecen y que los obliga a irse, literalmente, caminando sobre la frontera, el liderazgo lo ha asumido la presidencia de la

Asamblea Nacional, que guste o no, fue votada por catorce millones de personas. Quien contiene al autoritarismo desbocado del madurismo no es ninguna coalición de fuerzas izquierdistas, sino los países del mundo que por sus propias razones han decidido darle fecha de caducidad al bolivarianismo en el poder. Esta cartografía del conflicto definió, para reiterarlo, la inacción de las izquierdas y progresismos del mundo, que razonaron y actuaron dejando a su suerte al pueblo venezolano.

No es lo mismo la democracia, imperfecta todo lo que se argumente, a la dictadura. No me cabe en la cabeza ningún activista que, en la España de los cincuenta, hubiera balbuceado siquiera la consigna «Ni dictadura ni transición». O pongámoslo más cerquita, en el Perú de los noventa, «Ni Fujimori ni Toledo». A este despropósito es el que nos convocan, algunos, el día de hoy.

Se puede ser todo lo anti-Trump que se desee y, a su vez, estar en contra de todo lo que representa Nicolás Maduro. Yo mismo lo soy. Lo intolerable es asumir una posición que se niegue a incidir en los acontecimientos. Cualquier contención la podemos construir con las multitudes en movimiento. Pero para eso hay que estar en la calle junto a ellas. No invitándolas a la pasividad y la desmovilización porque sean otros y otras los que marquen el camino.

Publicado en febrero 2019

DIÁLOGOS, DIALOGUISMO Y DD.HH.

En un artículo reciente, titulado «Las escopetas y las palomas», el escritor nicaragüense Sergio Ramírez realizaba varias preguntas para su país que son válidas para Venezuela: «Negarse a las posibilidades del diálogo como salida a una crisis política parece insensato. Pero en el caso de Nicaragua primero hay que preguntarse qué clase de diálogo, y con quién. Y para qué». La situación emanada del Gobierno empujado en Managua no es la misma que la derivada de las autoridades radicadas en Caracas. Pero entre ambos, por ahora, la diferencia es de cantidad, no de calidad.

Desde una perspectiva de derechos humanos la resolución pacífica, institucional y democrática de los conflictos es un principio. Un defensor o defensora de derechos humanos siempre abogará por la no violencia. Y cuando opta por la agresión, aunque sea bajo el argumento de la «legítima defensa», ya se ha transformado en otra cosa.

La derrota de la estrategia de la transición por colapso, como resultado de la fractura de la coalición dominante, que fue la que hegemonizó la maniobra democrática del año 2017, y luego en el «Gobierno interino» del 2019, no lograron sus objetivos. Y este fracaso del movimiento civilista del país amerita la definición de un nuevo camino. Ante la falta de

un «mantra» cohesionador como antaño, las opiniones son disímiles. Una de las que se ha configurado en los últimos meses es la que plantea lograr «acuerdos» entre el Gobierno y la oposición, por lo que la hoja de ruta sería persistir, contra viento y marea, en los diálogos, y ofrecer a las partes los incentivos necesarios para que se mantengan dentro de la conversación. A este deseo, que la honra a la palabra empeñada sería suficiente para abrir las puertas de la democracia, lo denominaré «dialoguismo».

Como afirma el autor de *Adiós muchachos* no somos tan insensatos en excluir a las conversaciones entre contrarios, y los potenciales consensos en consecuencia, como método de construcción política. Lo que nos parece una ingenuidad es pensar que por sí solos, en el peor momento de debilidad del liderazgo democrático político y social, pueda tener un efecto diferente al que hasta ahora conocemos cuando el chavismo realmente existente conjuga el verbo «dialogar».

El dialoguismo argumenta que no nos encontramos ante una dictadura sino ante un Ejecutivo que ha tenido que, defensivamente, torcer sus pasos al autoritarismo como reacción ante el «radicalismo de la oposición». Y que, por tanto, Nicolás Maduro y su entorno son «demócratas acorralados», a la espera de los incentivos suficientes para retomar el sendero del Estado de derecho y el respeto a la Constitución. A mal diagnóstico, peor estrategia.

Sobre los estímulos, la reunión realizada en marzo de 2023 en Bogotá, convocada por el presidente colombiano Gustavo Petro, ratifica que no existe la real voluntad de mantenerse en un mecanismo de interacción política si esto significara el inicio de una erosión que pusiera en peligro la estancia indefinida en Miraflores: según, «salvo el poder todo es ilusión».

Para el credo bolivariano la «revolución» —lo que sea que se enmascare bajo este nombre— es un absoluto, por lo que su ADN es ajeno a la alternabilidad en la gestión pública. Cuba y Nicaragua son un continuo del que forma parte Venezuela. Por ello, en la simulación, el costo de los estímulos estará siempre en alza. ¿Hay posibilidades de lograr que algunas sanciones internacionales sean eliminadas? Ahora pidamos el fin de la investigación en la Corte Penal Internacional. Y así.

El dialoguismo argumentará que un buen negociante pide el todo para lograr algo. Y que lo importante es mantener abiertos los canales de comunicación. ¿Quién marcará el dial del teléfono rojo a Miraflores? El liderazgo político y social democrático, en este momento, no es una opción de poder que el interlocutor respete. Por ello los últimos telefonazos vienen con discado directo internacional, código de la ciudad de Washington. ¿Por qué agotar un mecanismo —el diálogo— precisamente en el momento de mayor debilidad y fragmentación de los actores políticos y sociales del país? Es como montar una campaña para el acceso igualitario de los países al Mundial de Fútbol de 2026 para enviar al actual equipo venezolano, la Vinotinto. La goleada en contra está cantada.

El diálogo, para ser efectivo, necesita de un músculo sociopolítico que lo respalde, que sea percibido como una amenaza creíble por quien se siente del otro lado de la mesa. Por ello, su precondition, de este lado, es el fortalecimiento de las organizaciones y gremios del país, con las capacidades para generar y protagonizar momentos de participación ciudadana que generen saldos políticos, sociales, simbólicos y culturales.

Traducido al lenguaje de derechos humanos, el papel de los defensores y defensoras en este momento es la defensa

del espacio cívico, del conjunto de libertades —bajo amenaza— que permiten el ejercicio del derecho de libertad de asociación y reunión, acompañando a todos quienes bajo un contexto restrictivo deseen fortalecer el tejido cooperativo de base en el país. Por su fidelidad a la causa de las víctimas, los defensores y defensoras enfrentarán una pretensión del dialoguismo: usar la impunidad como zanahoria. Por ello continuarán alimentando la única disuasión actual del autoritarismo: ser investigado y responsabilizado de sus actuaciones por los mecanismos internacionales de protección, como la Corte Penal Internacional y la Misión Independiente de Determinación de Hechos.

Publicado en mayo 2023

PRAGMATISMO Y DD.HH.

En diferentes conversaciones sobre la progresiva normalización de las relaciones de Nicolás Maduro con sus homólogos de la región, la palabra más repetida es «pragmatismo». Pudiera interpretarse como una reacción al voluntarismo maximalista de la anterior estrategia fallida, esa que intentó que hubiera una transición por colapso del régimen. O también, un síntoma de lo que hemos calificado como «dialoguismo»: la creencia de que mantener a toda costa los canales de comunicación abiertos con Miraflores logrará, en cierto momento y por sí solo, algún tipo de acuerdo político para la transición a la democracia.

Hay dos elementos que signan los análisis particulares sobre lo que pasa en Venezuela: la definición del tipo de autoritarismo que representaría el chavismo realmente existente y el lugar que se ocupa dentro del campo democrático. La estrategia anterior, la de transición por colapso, solo demandaba un rol: el de ciudadano movilizado que exigía un cambio en el espacio público. Cualquiera que sea el nuevo camino necesitará, en cambio, de múltiples actores en sinergia por la recuperación del Estado de derecho y la Constitución. Hasta ahora la polarización estimulada por el autoritarismo nos hizo desconfiar de la diferencia. Ejercitar el músculo democrático de la tolerancia y la diversidad, empequeñecido y oxidado, nos demandará un gran esfuerzo en lo sucesivo.

La democracia no intenta que todos piensen de la misma manera, uniformización que sí desea la pulsión totalitaria. En cambio, apuesta por que las diferencias de opinión puedan canalizarse y resolverse en políticas públicas para el beneficio de todos. Las experiencias previas y la formación intelectual moldean las maneras de razonar, de la misma manera que el lugar que se ocupa dentro de la sociedad.

Por lo anterior es predecible que un empresario tenga un acercamiento al conflicto que privilegie la reactivación del aparato productivo; que un sindicalista jerarquice la conquista de mejores derechos laborales para la clase trabajadora o que un dirigente partidista ponga de primer lugar los modos de seguir haciendo política a pesar de las circunstancias. Siendo así, no debería sorprender que la postura de los defensores y defensoras de derechos humanos sea la de «impunidad cero» y de mantenerse apegados a los principios presentes en la Declaración Universal de 1948.

En todas las experiencias regionales de transición al autoritarismo los defensores de derechos humanos han colocado como brújula de su actuación los intereses de las víctimas que representan. No hacerlo sería desdibujarse, dejar de ser lo que son. Si la racionalidad político-partidista coloca el perdón sin justicia sobre la mesa de negociación, la mentalidad activista cuestionará que la impunidad sea utilizada como objeto de transacción. Si la subjetividad economicista postula que el crecimiento de los indicadores financieros generará grietas democratizantes, los defensores exigirán que la agenda de relaciones bilaterales incluya a los derechos humanos. Si un académico asegura que se debe aplicar la teoría de los incentivos, desde una ONG se abogará por la liberación de todos los presos políticos. El desafío para el campo democrático es

sintonizar todas estas aspiraciones, en un difícil equilibrio no exento de tensiones.

El papel de un defensor o defensora de derechos humanos es ser la mala conciencia de sociedades que son presionadas para el olvido. De persistir en que cualquier decisión debe fortalecer, y no debilitar, la posibilidad de vivir de nuevo en democracia, precondition para una dignidad sin exclusiones. El seguir señalando a los victimarios hasta que sus crímenes sean colocados bajo la lupa de una justicia sin adjetivos, para que se modifique lo que haya que cambiar para que el abuso de poder no vuelva a repetirse; de ser heraldos de la esperanza cuando se multiplican los llamados a la resignación. El espíritu que animó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos fue precisamente el de las grandes aspiraciones, opuesto a la vocación chiquita y pragmática de quienes, luego de la Segunda Guerra Mundial, solo aspiraban a pasar la página.

Publicado en mayo 2023

REPOLARIZACIÓN E IMPOTENCIA EN LA VENEZUELA DE 2019

En abril de 2002 fui uno de los que difundió un comunicado sobre aquel golpe de Estado titulado: «Ni Chávez ni Carmona». Hoy, dieciséis años después, algunas personas promueven una toma de postura similar, expresada como «Ni Maduro ni la MUD». ¿Es plausible, década y media después, mantener esta misma situación? ¿El contexto y las circunstancias siguen siendo similares?

En el año 2002 éramos testigos de una disputa por la hegemonía entre dos grandes grupos, diferenciados ideológicamente, la nueva burocracia bolivariana y aquella que había sido desplazada del poder. De manera aluvional, el chavismo había conquistado importantes adhesiones de diferentes sectores del país. Tenía bajo su control a importantes sectores del Estado, influía en las Fuerzas Armadas, perfeccionaba el aparato comunicacional estatal, comenzaba a crear su propio empresariado. La figura de Hugo Chávez poseía una gran capacidad de convocatoria y promovía una promesa de país que, en ese momento, estaba contenida en la Constitución de 1991. Por su parte, la oposición, nucleada en lo que era la Coordinadora Democrática (CD), tenía participación y control de algunos pedazos del Estado, poseía un aparato comu-

nicacional privado a su servicio, era respaldado por un sector importante del empresariado, tenía contactos con algunos sectores de las Fuerzas Armadas y se mantenía aferrado al imaginario simbólico y cultural de la Venezuela del pasado. Como yo mismo lo hice durante esos años, tenía pleno sentido plantear la existencia de una polarización sociopolítica que reducía el conflicto a la existencia de dos únicas identidades, ser «chavista» o «antichavista», cada uno con una supuesta connotación ideológica, que negaba cualquier otra posible representación identitaria. En esos momentos personas como yo no teníamos un lugar en el mapa político del momento, que comenzó a configurarse gaseosamente años después bajo la etiqueta «Ni-Ni». Hasta el año 2015, las características de los Ni-Ni fueron objeto de un intenso debate. Comenzaron a aparecer en las encuestas de opinión y fueron uno de los sectores electorales atesorados en las campañas sucesivas.

En el año 2006 fui parte del esfuerzo por promover un tipo de oposición diferente al nucleado en la CD, cuyos contornos fueran nítidamente de izquierda como, por ejemplo, el que se configuró bajo el mandato de Rafael Correa en Ecuador. De aquella inquietud surgió el Foro Social Alternativo, un espacio antagonista del Foro Social Mundial organizado por el Gobierno en Caracas en enero de ese año, así como el grupo de opinión «Insurgentes» para rechazar la propuesta de reforma constitucional del año 2007. Salvo estas reacciones, aquella oposición de izquierda no prosperó, canibalizada por egos y sectarismos, diluyéndose en la diatriba polarizada y electoralizante del momento. Con todas y sus imperfecciones, no obstante, podíamos actuar en el marco de una democracia e invocando libertades democráticas como la de expresión o la de reunión.

La muerte de Hugo Chávez cambió todo. El bolivarianismo se quedaba sin su único y principal referente, ya nada sería igual para un modelo de gobernabilidad basado en el culto a la personalidad. En su primera elección sin el caudillo, el chavismo sacó menos del 2 % de diferencia sobre la oposición, por lo que era previsible que ante la continuidad de ese tipo de gestión fuera cuestión de tiempo convertirse en minoría electoral. Diciembre de 2015 lo confirmó. Lo que fue sorpresivo de los resultados fue el grado de rechazo, pues como se recordará, la coalición oficialista obtuvo dos millones de votos por debajo de la opositora, su peor resultado comicial en toda su historia. Para mantenerse en el poder, el chavismo tomó la decisión, sencillamente, de convertirse en una dictadura.

La muerte de Chávez primero, y luego la transformación de lo que era una democracia cada vez más mínima en una dictadura moderna, provocó un reacomodo de los actores políticos. Lo más importante fue la aparición de corrientes chavistas, cada una con un adjetivo diferente («originarias», «críticas», «auténticas») que se distanció de Nicolás Maduro. Algunos de estos chavismos o exchavismos pasaron a coordinar esfuerzos con la oposición tradicional para exigir el restablecimiento de la Constitución y de la propia democracia. La polarización, entonces, dejó de ser ideológica para ser una confrontación entre dos modelos de gobierno: democracia contra dictadura. Como anarquista, para hablarlo en esos términos, me puedo reconocer dentro de quienes buscan una radicalización o intensificación de la democracia, llamémosla «democracia directa» si queremos, pero democracia al fin. Para ello debo actuar necesariamente con otros diferentes a mí, para volver a un piso común —la democracia— que permita la emergencia de todas las alteridades posibles.

Con todo el desprestigio alentado por el chavismo es casi imposible plantear algún tipo de «salida por la izquierda». La pureza ideológica, además de falsa para el caso venezolano —quienes hoy hablan de «Ni Maduro ni Mud» fueron hasta, antes de ayer o ayer mismo, corresponsables del autoritarismo desenfrenado de nuestros días—, condena a la impotencia y la inacción frente a lo que sucede. Los actores sociales y políticos son los que son, y con ellos habrá que empujar para volver a un momento que nos permita caminar hacia la promoción de cualquiera de los valores que defendamos y a su materialización en formas de organización comunitaria alternativas. Incluso me atrevería a sugerir que quienes plantean su posicionamiento de esta forma, «Ni Maduro ni MUD», están enmascarando la gravedad de la situación venezolana al mantener a esos dos actores en el mismo plano, cuando no lo están, en el control y ejercicio de los poderes fácticos que nos condenan a la pobreza y a la estatización de la vida cotidiana.

No estoy planteando la mimetización con nadie. Usted siga promoviendo la identidad, sueños y aspiraciones que desee. Pero hay que ser honesto para reconocer que bajo el mantenimiento de la dictadura madurista no hay posibilidades para los proyectos autonómicos en lo económico, social o político, lo cual solo será de nuevo posible en ese espacio, impreciso, en construcción y en disputa permanente, llamado democracia, que debe ser alcanzado por gente que piensa diametralmente diferente actuando de manera conjunta. Luego de la experiencia práctica de la dominación bajo las pretensiones del delirio ideológico, qué bueno que eso que hemos conocido como democracia sea así.

Publicado en enero de 2019

¡GOOD BYE CLACSO!

Alexander Kerner era un adolescente que vivía en la República Democrática Alemana, la mitad germana bajo dominio de la Unión Soviética, en 1989 y, como muchos otros, deseaba un cambio de régimen. Un día, cuando participaba en disturbios contra la policía, su madre Christiane lo ve, y de la fuerte impresión que le produce pierde el conocimiento. Entra, entonces, al hospital en estado de coma. Ella recupera su conocimiento en 1990, meses después de la caída del Muro de Berlín, pero para evitarle emociones fuertes que la vuelvan a enfermar, Alex hace todo lo posible para ocultarle a su progenitora, militante acérrima del Partido Socialista Unificado de Alemania, todos los cambios que han ocurrido en el país. Este es el argumento del filme *Good bye, Lenin!* de Wolfgang Becker (2003), que por la originalidad de su historia y buenas actuaciones fue galardonada con varios premios cinematográficos en la época.

Hay quien dice que, usualmente, la realidad supera la ficción. Una estrategia similar de mistificación, en el espíritu del filme anterior, ocurre en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) respecto a Venezuela: hacen todo lo posible para convencer a sus radios de influencia que la situación del país se mantiene congelada en el tiempo, di-

gamos, en el año 2009, cuando Noam Chomsky estuvo en Caracas y le dijo a Hugo Chávez que era una fuente de inspiración de la construcción del «otro mundo posible». Uno que hoy, fuera de las paredes de CLACSO ha condenado a la miseria al 80 % de su población, ha expulsado de manera forzada a más de ocho millones de personas, ha enriquecido a la cúpula gobernante y mantiene en prisión más de doscientos seenta presos políticos. Esta curiosa simulación se ejemplifica en la convocatoria al «Diploma Superior en Pensamiento Jurídico Crítico en Nuestra América», que el ente impartirá en modalidad virtual en junio de 2024.

CLACSO, nominalmente, es una institución internacional no gubernamental creada en 1967 a partir de una iniciativa de la UNESCO. Con sede en Buenos Aires, afirma reunir a novecientos treinta y siete centros de investigación y programas de posgrado en diversos campos de las ciencias sociales y humanidades, radicados en cincuenta y seis países de América Latina y el Caribe, como también en Estados Unidos, África y Europa. En lo concreto se ha convertido en un fortín del academicismo «dialéctico y científico», la última trinchera de refugio de la intelectualidad progresista en la región, a la espera del giro a la izquierda del universo.

El objetivo general del diploma superior ofertado es «analizar los nuevos paradigmas del pensamiento jurídico crítico en nuestra América en época de importantes transformaciones geopolíticas globales». Entre los objetivos concretos se encuentran «ofrecer un marco teórico-práctico basado en los nuevos paradigmas que efectivamente sirven de base a una más eficaz deconstrucción tanto teórica como práctica de la democracia, los derechos humanos y la paz en los tiempos actuales»; «comprender que la pluralidad de las contestaciones

actuales a dicha dominación van potenciando crecientemente formas nuevas de política, democracia, Estado y normatividad fundamentadas en la forma comuna o comunidad» y «exponer sobre la pluralidad normativa de nuestros tiempos (...) como la normatividad societal potenciada autónomamente».

El diploma consta de cinco lecciones distribuidas en cinco módulos. La tercera clase lleva por título «El debate sobre la transformación progresiva de la forma política estatal y la apuesta a favor de su sustitución creciente por la forma comunal o comunitaria. El Estado comunal de Venezuela, comunitario en Bolivia y Estado de transición socialista cubano». La clase octava «El constitucionalismo combativo de Venezuela contra el golpismo y la intervención extranjera. El impulso constitutivo de la forma comunal como nueva estructura de poder —«nueva geometría del poder»— más allá del Estado». Entonces, tenemos que para estos académicos el Estado comunal, la comuna y los consejos comunales venezolanos serían parte de «los nuevos paradigmas que deconstruyen, teórica como prácticamente, la democracia, los derechos humanos y la paz» —disculpen ustedes el lenguaje ampuloso de los científicos sociales—. El detalle es que CLACSO no ofrece este conocimiento como parte de las Ciencias Forenses, lo cual sería absolutamente válido, sino como nuevos paradigmas que estarían en «trance de ser», como una realidad inexorable que solo los tontos o los alienados por el imperialismo ignoramos.

El retroceso de las formas de participación social, con o sin autonomía, es una de las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja instalada desde el 2013 entre nosotros, que ha debilitado al tejido asociativo del país en la lucha por

la supervivencia de las personas de carne y hueso. Y de ese reflujo dan constancia las propias publicaciones editadas por CLACSO en los últimos meses, que estudiando y visibilizando experiencias concretas en el resto de la región no han tenido la manera de incluir a Venezuela. Para no cansar, solo dos ejemplos: «El apoyo mutuo en tiempos de crisis La solidaridad ciudadana durante la pandemia COVID-19» de Oriol Nel·lo, Ismael Blanco y Ricard Gomà: Estudios de caso de Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia, con una tabla de «bancos de recursos» con veinticinco países y «Economías populares. Una cartografía crítica latinoamericana», compilada por Verónica Gago, Cristina Cielo y Nico Tassi, con autores y autoras que escriben desde Bolivia, Chile, Brasil, México, Ecuador, Colombia, Argentina, Perú y Honduras. ¿Dónde estarían los Consejos Comunales durante la pandemia del COVID-19 o en los emprendimientos de economía popular en los últimos años? En el mismo «no lugar» que el resto de las organizaciones comunitarias y sociales venezolanas en los últimos años, cuyos integrantes o se han ido del país como migrantes forzados o sobreviven con uno de los salarios más depreciados de América Latina.

Como una evidencia de lo inexistente, el 21 de abril de 2024 Nicolás Maduro convocó a una «Consulta Popular Nacional 2024» en la que supuestamente participarían cuarenta y nueve mil Consejos Comunales y más de un millón trescientas mil voceras y voceros de todo el país. Las notas de prensa sobre los niveles de participación no revelaron la cantidad de votos recibidos, reduciéndose a informar que cuatro mil quinientos proyectos comunales habían sido elegidos, una cifra que ya había sido revelada previamente en la propia invitación a la consulta. Ese día los centros electorales mos-

traron el mismo nivel de entusiasmo que el referendo por el Esequibo del 3 de diciembre de 2023.

La antigua base electoral del oficialismo, de donde se nutrían comunas y Consejos Comunales, hoy no solamente se encuentra en crisis, sino en rebelión contra Nicolás Maduro. Por tanto, el Estado comunal ahora es un recuerdo de un ayer que fue pasión, el mejor momento político de Hugo Chávez Frías cuando contaba con ingresos extraordinarios para estimular por todo el país una extensa red clientelar, la cual reforzaba su dominación carismática. Uno se preguntaría entonces cuál es la razón que para Venezuela las eminencias de Clacso continúan insistiendo que la tierra es plana, o que los Consejos Comunales serían un ejemplo de «normatividad societal potenciada autónomamente» cuando desde su propio inicio fueron precisamente todo lo contrario. La razón es sencilla: Clacso no es un centro de generación de conocimiento (con todo lo complejo y contradictorio que conlleva la comprensión de los fenómenos) sino un importante vector de propaganda. Alguien dijo alguna vez que la ideología es una falsa conciencia, deformada y deformante de la realidad en función de los intereses de quien la sustenta.

En *Good bye Lenin!* finalmente Christiane vuelve al hospital para fallecer, donde se entera de los cambios ocurridos, información que oculta a su hijo, quien continúa haciendo malabares de todo tipo para hacerle creer que aún vive en los días gloriosos del comunismo. Mientras sea política y económicamente rentable, será la misma operación que continuará realizando CLACSO con respecto a lo que ha pasado y pasa en esta ribera del Arauca vibrador.

Publicado en mayo 2024

CONTRA LA UNIDAD, POR LA ACCIÓN CONJUNTA

En el esfuerzo por la recuperación de la democracia en Venezuela la «unidad», entendida en sentido amplio, es un principio clave. El título de este texto, no obstante, quiere problematizar lo que en los últimos años hemos entendido bajo este término, que a nuestro juicio, no solo ha sido contraproducente, sino también funcional para que el autoritarismo logre su principal objetivo en su permanencia infinita en el poder: la separación de quienes lo cuestionan.

¿Qué es lo que hemos interpretado como «unidad»? Precisamente, ser «uno», análogos y compactos en la respuesta a la dictadura. Como reza el concepto, cultivando la propiedad de no dividirnos ni fragmentarnos sin destruirnos. La polarización, que principalmente fue azuzada por el populismo autoritario de izquierda que hemos padecido en los últimos años, construyó en contraste la identidad «antichavista», que obligatoriamente debía asumir cualquier disidente para ser reconocido por los otros como tal. A partir del año 2015, con la exacerbación del cénit de la ausencia de democracia, la estrategia de mayor consenso promovida por la oposición derivó en el llamado mantra de los tres pasos (cese de la usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres). En este

punto «la unidad», como se internalizó por una serie de situaciones, era ser parte de la identidad «antichavista» sin fisuras y sin comulgar, sin ningún tipo de duda, con el mantra. En una curiosa voltereta del enfrentamiento del militarismo hegemónico, la pretensión de pensar y actuar, todos, de manera similar.

Espero ser suficientemente pedagógico con el punto. Hay ocasiones en la historia en que la sincronía de las fuerzas sociales detrás de una misma estrategia no solo es importante, sino útil en el logro de los objetivos planteados. Pero en el caso venezolano reciente, especialmente en la fase que se inició a partir de enero de 2019, este tipo particular de «unidad» no solo fue ineficiente para lograr cualquiera de sus metas, sino que debilitó al conjunto del campo democrático hasta el grado de crisis en el que nos encontramos en el momento en que esto se escribe.

Este tipo de «unidad» presupone una vocería única, valga la redundancia, que la represente. Y si la duración del conflicto ha erosionado los procesos internos de toma de decisiones es un caldo de cultivo para que aparezcan las tensiones por la disputa de su control. El autoritarismo solo tuvo que esperar el tiempo suficiente para que las contradicciones internas emergieran. De esta manera pudo introducir los estímulos necesarios para aumentar exponencialmente la separación y, finalmente, que los puentes de comunicación entre las partes se dinamitaran hasta impedir cualquier iniciativa común.

Si nuestro esfuerzo en vez de enflaquecer al autoritarismo nos debilita, es hora de repensarlo. Insistir en ello es profundizar los resultados conocidos. Si el chantaje unitario, por calificarlo provocativamente, ha sido ineficaz, es hora de innovar con la dispersión estratégica: atacar al autoritarismo,

simultáneamente, desde varios puntos. Este método ha sido llamado «*netwar*» o «enjambre» en la literatura sociológica, y hay múltiples ejemplos de cómo ha sido aplicado en los últimos años en diferentes latitudes y conflictos. Para aclarar confusiones no es ningún llamado al «dibujo libre» o que cada uno haga lo que le parezca. Una estrategia de dispersión tipo «avispero» necesita de flujos de comunicación y coordinación entre las diferentes partes, pues la idea es reaccionar conjuntamente a una amenaza común.

En una ofensiva de avispero todas las iniciativas son legítimas en sí mismas. Los actores son distintos, en sus intereses y subjetividades. Por ello la única discusión pertinente es la de la eficacia, que debe valorarse en función de la serie de metas que cada una haya definido. Nos guste o no, en política hay un gran abanico de posibilidades que usted y yo podemos discutir, moralmente, hasta el infinito, que van desde la mínima confrontación hasta la insurrección armada. Lo cierto es que estarán, y seguirán estando, si las situaciones de opresión y empobrecimiento persisten. En vez de dilapidar energías en interpelar su legitimidad el debate debe reorientarse hacia los niveles de eficacia, que les haga ganar o perder seguidores. Que cada quien escoja la estrategia con la que se sienta más cómodo y haga peso desde ese punto. Lo importante es tener la capacidad para responder colectivamente a las agresiones comunes y mantener las coordinaciones necesarias para identificar oportunidades en la que una ofensiva común pueda aumentar el desgaste del elefante autocrático.

Publicado en febrero de 2021

EL HOMBRE MUERDE AL PERRO

El pasado lunes 12 de marzo en la ciudad de Ginebra, en el marco de las deliberaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se realizó un panel sobre nuestro país en el Festival Internacional de Foros y Cine sobre Derechos Humanos. El debate, ocurrido posteriormente de la proyección del extraordinario documental *Mujeres en caos*, de la directora venezolana Margarita Cadenas, tuvo como sugerente título *Terror desde la izquierda*. Curioso, por decir lo menos, para quienes hemos estado desde hace mucho tiempo alertando que en Venezuela las cosas no son como las dice el Gobierno. A fuerza de constancia y sobredosis de paciencia, la comunidad internacional empieza a tener oídos receptivos para oír los matices de nuestro drama endógeno. La noticia, entonces no es que el perro muerda al hombre, sino que este sea el que apriete mandíbulas sobre el canino. Que los que prometen salvación y redención sean los constructores de nuevas y peores penurias. El moderador fue el periodista francés Xavier Colin, quien fue acompañado por Stefan Krauss del Parlamento Europeo.

En ese panel estuvo, vía Skype, Lilian Tintori y, presencialmente, Luisa Ortega Díaz, Santiago Cantón —exrelator

de la Comisión Interamericana de DD.HH.— y quien esto escribe. El público agotó las doscientas butacas y, por las intervenciones y saludos, compuesto por una gran cantidad de migrantes venezolanos. El debate fue intenso y de altura, con la mayoría de las preguntas dirigidas a la fiscal general destituida por la Constituyente. Colin, como buen periodista, iba al grano. ¿En qué momento usted cambió de opinión? «Yo sigo siendo la misma», respondió Ortega, describiendo cómo la militarización de la seguridad ciudadana —una de las primeras medidas de Maduro como presidente— la habían motivado en alzar su voz. En otro momento le realizó una pregunta cruzada con Tintori: ¿Tienen algo que decirse la una a la otra? Las respuestas de ambas fueron evasivas, políticas y diplomáticas. Sin desaprovechar la oportunidad que tenía, el periodista enfiló a Cantón: «Usted ahora está involucrado con el proceso iniciado en la Corte Penal Internacional a Venezuela. ¿La doctora Ortega, por ejemplo, pudiera ir detenida?». El careo fue elegantemente respondido por el veterano defensor de derechos humanos: «Todos los funcionarios venezolanos a partir del año 2005 que se les demostrara responsabilidad pudieran serlo». En una de las intervenciones de los asistentes le preguntaron a la fiscal general —legítima aún para quienes nos oponemos a la dictadura constituyente— el porqué había permitido la provisionalidad de fiscales bajo su gestión, uno de los elementos denunciados como parte de las irregularidades del sistema de administración de justicia. Su respuesta fue, palabras más o menos: «Mi gestión comenzó un proceso de institucionalización de los concursos». Mientras esto ocurría en Suiza, en el universo Twitter venezolano se criticaba que Ortega hablara en un evento de derechos humanos.

Dos comentarios. El primero es que cualquier proceso de transición del autoritarismo de la democracia a la dictadura necesita, como primer paso, el reconocimiento de los errores cometidos por cualquier funcionario cuya acción u omisión haya generado violación de derechos humanos. Pero también de cualquier otro actor que haya participado en actos de violencia política. No es un camino fácil, y necesita de una madurez como sociedad que parece que aún estamos muy distantes de tener. Sin *mea culpa*, no habrá reconciliación posible. El segundo es que es imposible lograr ahora mismo, en momentos en los que la dictadura amenaza con perpetuarse mediante simulaciones institucionales, lograr juntos todos los objetivos de justicia social y libertad que uno desearía. El primer paso para poder investigar la responsabilidad de los funcionarios, con pulcro respeto al debido proceso y sin ánimos de venganza, es bajo una justicia en democracia. Y esto no será posible sin la derrota del autoritarismo, la transición a un momento de reconstrucción de país y el concurso de todos los sectores que, por las razones que sean, quieran sumar esfuerzos para ello. O para decirlos en los términos del evento en Ginebra, conjuremos del terror instaurado por quienes oprimen en nombre de la izquierda.

Publicado en marzo de 2018

POR UNA TRANSICIÓN CON PRINCIPIOS

Los últimos hechos ocurridos en Venezuela parecen congelar la posibilidad de un cambio político negociado a corto plazo. Sin embargo, la desesperación por lograr el cese de la usurpación no puede hipotecar los principios éticos y morales que, con mucha dificultad, se han ido incorporando en la narrativa de la ofensiva democrática en el país.

En la teoría sobre la acción colectiva, que intenta explicar por qué la gente se moviliza para exigir cambios en su entorno, se ha concluido que los agravios e injusticias sociales no son suficientes, por sí mismos, para iniciar una protesta masiva. Siguiendo la reflexión de Salvador Martí y Puig, académico de la Universidad de Girona en España sobre los movimientos sociales, para que se genere un movimiento por el cambio debe existir una conciencia de la situación, por un lado, y un discurso que interprete y comunique la relación de esa realidad injusta con las políticas emanadas por el poder de turno. Además de lo pedagógico, el discurso debe justificar, dignificar y animar a la acción colectiva. De esta manera tiene la capacidad de sacar el descontento individual del ámbito privado, donde se padece como consecuencia de una humillación, elevándolo a la dimensión pública como parte de un

rechazo grupal al abuso, con lo que su expresión abierta se dignifica desde el «nosotros». Al identificar un blanco para los agravios, el discurso también comunica las reivindicaciones y fomenta símbolos capaces de movilizar a la gente.

Snow y Benford han señalado que un movimiento social es un actor político colectivo, creador de significados con el objetivo de desafiar los discursos sociales dominantes y exponer una forma alternativa de definir e interpretar la realidad. Por ello, tan importante es la acción política concreta como la elaboración de una narrativa que lo acompañe, la legitime y la refuerce. Este discurso crea una visión compartida para todos los que confluyen en el movimiento, utilizando elementos ya existentes en la sociedad (referentes culturales y episodios históricos), así como valores y principios que antagonizan con lo negativo que representa el poder de turno.

Para Gamson y Meyer «el discurso de los movimientos sociales debe incidir sobre tres aspectos que son esenciales para la acción colectiva: la injusticia, la identidad y la eficacia. El primero permite definir a ciertas condiciones sociales como problemáticas; el segundo persigue construir una identidad, un sentido de pertenencia entre los miembros del movimiento, un “nosotros” y un “ellos” sobre los que recae la responsabilidad por las condiciones adversas que se pretenden modificar; y finalmente, también es preciso que los integrantes y simpatizantes asuman que sus acciones pueden ser eficaces para conseguir los objetivos propuestos». Estos dos autores identifican dos tipos de discurso: la retórica del cambio y la retórica reactiva. Esta última hace hincapié en los temas de riesgo (se pierde más de lo que se gana), la conformidad (no existe oportunidad para el cambio) y los efectos perjudiciales (la actuación para el cambio no haría sino em-

peorar las cosas). En cambio, la retórica del cambio resalta los temas de urgencia (la inactividad es más arriesgada que la acción), la actividad (necesidad de aprovechar la apertura de oportunidades del momento) y la posibilidad (las nuevas oportunidades contrarrestan los posibles efectos perversos).

Construyendo el sentido al movimiento

Lo anterior nos ayuda a explicar el papel de las narrativas en el conflicto venezolano. En su mejor momento el chavismo fue un movimiento social no solo porque tenía un líder carismático como Hugo Chávez, sino porque supo construir discursivamente un imaginario que mantenía movilizados y cohesionados a sus seguidores. Si recordamos, este discurso tenía una promesa de futuro, el «socialismo del siglo XXI», cuya definición era tan ambigua que permitía completarse con los propios deseos y expectativas de sus seguidores. Siguiendo la lógica populista de la controversia y la separación, definió perfectamente un «ellos» y un «nosotros». Además, utilizó diferentes referentes culturales (Mr. Danger y Florentino y el Diablo, por citar solo dos) que ratificaban permanentemente el sentido del movimiento y transmitían a un público amplio los valores que enarbolaban y un fuerte sentido de pertenencia a la identidad «chavista». La evaporación del chavismo como «movimiento» fue consecuencia de la desaparición física de Hugo Chávez. Por un lado, la emergencia de la crisis económica que erosionó las políticas sociales que materializaban el supuesto interés en el bienestar del pueblo, así como por los reveses electorales, corrupción y represión que disminuyeron sus bases de apoyo internacional. Hoy los mitos, rituales, símbolos y la promesa de futuro del chavis-

mo han desaparecido, por lo que Nicolás Maduro no tiene la posibilidad de movilizar a amplios sectores de la sociedad por sí mismo, por la sencilla razón de que no representa un movimiento, sino que encabeza un Gobierno basado en la represión y el temor.

En contraste, durante muchos años la oposición tuvo como principal argumento narrativo el rechazo a todo lo que representaba el chavismo. La principal debilidad de su cuerpo discursivo es que la oposición no sustituyó el vacío dejado por el bolivarianismo con su promesa de futuro en la que amplias mayorías del país se sintieran identificadas. Salvo el uso del tricolor, fueron las protestas de los años 2014 y 2017 que estimularon que el ciudadano común aportara el contenido faltante al movimiento de rescate por la democracia, generando símbolos, canciones, íconos y, lamentablemente, mártires. Todos los factores comenzaron a confluír para que los esfuerzos de rescate de la institucionalidad democrática se transformaran en un movimiento. Uno que comenzó a levantar principios morales (la no discriminación, la inclusión, la igualdad de oportunidades, la libertad) que daban sentido a su acción.

Como bien lo sabe el chavismo, estos principios no son estáticos y deben ratificarse permanentemente, no solo con hechos sino también con palabras. Lo peor que le puede pasar al movimiento democrático que se opone a la dictadura de Nicolás Maduro es que, en el plano del discurso —que como vimos es fuente permanente de legitimación, adhesión y movilización—, su antagónico comience a disputarle la propiedad de los valores éticos que le dieron origen. Podemos ser ineficaces en el logro de nuestros objetivos, pero abandonar el terreno de los principios por abrazar un pragmatismo cortoplacista es, sencillamente, suicida.

El liderazgo opositor perdió una oportunidad cuando decidió boicotear la propuesta de una tregua humanitaria y sumarse a la ofensiva lanzada por el Departamento de Justicia en Estados Unidos en plena crisis generada por la pandemia de COVID-19. El mensaje de fondo de la propuesta era que, en medio de la emergencia sanitaria, el bienestar de la gente estaba por encima de cualquier otra consideración. Juan Guaidó optó por hablar de la lucha contra el narcotráfico. Lo que interpretó un importante sector de la población es que la oposición usaba al Coronavirus como una herramienta para alcanzar lo que por su propia estrategia no había logrado. Y Maduro quedó como el adalid del interés por la gente, como recuerda cada vez que puede: «Estaba dispuesto a firmar un acuerdo humanitario y la oposición no».

De los episodios recientes, el retroceso más grave en la narrativa basada en los principios lo constituye la declaración dada por JJ Rendón, en ese momento parte del Comité de Estrategia del Gobierno Interino, a *The Washington Post* a raíz de los hechos de Macuto: «Guaidó estaba diciendo que todas las opciones estaban sobre la mesa y debajo de la mesa. Estábamos cumpliendo ese propósito». En lo que es un acuerdo para reducir los daños, junto a Sergio Vergara renuncia a su cargo sin explicar con claridad su vinculación con el oscuro ex boina verde norteamericano Jordan Goudreau. La respuesta del presidente de la Asamblea Nacional aumenta el desconcierto: «Agradezco y reconozco el compromiso que han demostrado con Venezuela, así como el paso que dan en el marco de la lucha que estamos librando por la Libertad y la Democracia». Ninguna amenaza de Maduro puede dinamitar el actual movimiento democrático como el respaldo a la estrategia de jugar con cartas debajo de la mesa.

Con o sin Guaidó el esfuerzo por transitar de la dictadura a la democracia debe tener dentro de sus baluartes más preciados el apego a principios morales y éticos que sean precisamente lo contrario a lo que representa un Gobierno que ha expulsado de manera forzosa a más de cuatro millones de venezolanos, asesinado a más de trescientas personas en manifestaciones y condena a la miseria y al ostracismo al resto. En 1998 la opción de dejar atrás a los adecos y los copeyanos, de cualquier manera, es lo que precisamente nos trajo hasta acá.

En lo personal prefiero una derrota —que siempre será circunstancial— con principios, que una victoria sin ellos.

Publicado en mayo de 2020

TIRADO: LA GRANDIELOCUENCIA QUE DEFORMA OÍDOS

El antiimperialismo hegemónico, ese que abunda en ciertas izquierdas, describe un mundo que no existe más. Aunque antes, en tiempos de Guerra Fría, se podía discutir sus postulados, hoy como nunca, su discurso es una narrativa de dominación, no de emancipación. Estas afirmaciones son ratificadas a partir de la lectura del libro *El lamfare. Golpes de Estado en nombre de la ley* (Arantxa Tirado, 2021), en el que la politóloga intenta darle nuevos aires a la pulsión antinorteamericana. Sin embargo, sus argumentos son tan dispares y débiles que, finalmente, nos hace concluir que la principal víctima descrita en el texto es la inteligencia.

Aunque los teóricos actuales del antiimperialismo hagan malabares retóricos, las consecuencias prácticas de su discurso son un vulgar y ramplón sentimiento anti-Estados Unidos. Por ejemplo, Andrés Kozel, en el libro *El imaginario antiimperialista en América Latina* (Clacso, 2015), nos dice: «El antiimperialismo podría definirse como una modalidad de la resistencia política y cultural que involucra aspectos diversos, entre los que cabe mencionar un tipo de discurso, una retórica, una simbología, una serie de gestos dotados de rasgos específicos». Sin embargo, las propias ilustraciones del libro,

con la figura del Tío Sam en diferentes formas, nos recuerdan al respecto las palabras de Karl Popper: «Por ahora hasta nuestros mismos oídos se han deformado, de modo que no pueden oír más que palabras grandilocuentes». Los antiimperialistas del siglo XXI siguen pensando como los de hace un siglo atrás: los Estados Unidos son responsables de todos los males del mundo, a pesar de todas las evidencias que los obligarían a matizar esta afirmación. En el año 2000 apareció un libro que parecía zanjar esta discusión, *Imperio*, de Michael Hardt y Antonio Negri, ideas que fueron expandidas en el siguiente texto, *Multitud*: «El orden global contemporáneo ya no puede entenderse en los términos del imperialismo que practicaron las potencias modernas, basado principalmente en la extensión de la soberanía del Estado-nación sobre unos territorios extranjeros. Lo que emerge hoy, en cambio, es un “poder en red”, una nueva forma de soberanía, que incluye como principales nodos a los Estados-nación, junto con las instituciones supranacionales, las principales corporaciones capitalistas y otros poderes». La globalización del capitalismo, luego de la eclosión de la Unión Soviética, precisamente explicaba la emergencia de potencias económicas con la Unión Europea, el Pacífico Asiático, la India o la Federación Rusa que pasaron a disputarle espacios militares, económicos y políticos a los Estados Unidos. No es que Washington no pinte nada en el mundo, sino que ha tenido que compartir influencia y protagonismo con otros. Precisamente, los Gobiernos de Donald Trump y Joe Biden son evidencias de ese retroceso. Estados Unidos, para bien y para mal, dejó de ser el «policía del mundo».

Arantxa Tirado Sánchez es una politóloga española y doctora en estudios latinoamericanos que, de la mano del

también español Pascual Serrano, intenta posicionarse como una teórica revolucionaria en América Latina. Que tales intenciones no sean posibles en la península ibérica pudieran explicarse a partir del libro centro de este artículo. Tirado ha hecho una tesis académica, digamos bastante aceptable, sobre el concepto *lanfare*. Pero, a partir de allí, intenta proyectarla como el gran descubrimiento de la teoría revolucionaria del siglo XXI, pasando del trabajo académico al panfleto. Arantxa es muy prolija en las citas de pie de página cuando habla del *lanfare*. Pero cuando hace aseveraciones de cómo se concretaría en la realidad, ni se molesta en decirnos en base a qué o dónde hay un documento que respalde el edificio conspiranoico en el que habita. Por ejemplo, luego de hablar de la Contra nicaragüense, que sí existió en la década de los ochenta, pasa a Venezuela del 2020 a «los elementos paramilitares infiltrados en los barrios venezolanos», página 113, sin darnos ninguna cita que lo respalde. Pero así está lleno todo el texto, de recortar y pegar toda la propaganda de los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela en el texto. Otro ejemplo, página 214, es cuando habla de los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos, activados sobre Venezuela, que también serían *lanfare*. Escribe que la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, un organismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 2019 es «una misión encabezada por un abogado con vínculos con la dictadura de Pinochet, de conocidas posturas reaccionarias, lo que no es un dato menor en este caso». Lo escribe sin despeinarse. Sin vínculo, cita ni pie de página, para una afirmación de tamaño naturaleza. El abogado del que habla, del que no coloca su nombre, es Francisco Cox.

Cox, en su ejercicio como abogado privado fue parte de un bufete que tuvo como cliente a Jovino Novoa, subsecretario general de Gobierno bajo Augusto Pinochet, pero que en el año 2015 fue acusado de recibir sobornos en el año 2013 y usarlos en una campaña electoral ese año, por lo que fue condenado a tres años de presidio. Lo que omite convenientemente Tirado es que ese mismo Cox, como abogado en derechos humanos, también es parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar sobre el caso de los cuarenta y tres desaparecidos de Ayotzinapa. El trabajo de la GIEI, y por tanto la presencia de Cox, es apoyada no solo por los familiares de las víctimas, sino también por la mayoría de las organizaciones de izquierda mexicana. Y ya que a la politóloga le interesan tanto «las posturas reaccionarias» y la vinculación con Pinochet del jurista chileno, también omite las palabras de Cox en el año 2023, sobre Venezuela: «Es desalentador escuchar en un foro como el Consejo de Derechos Humanos erigir la no interferencia, la soberanía nacional, como argumentos para evitar la fiscalización y la vigencia de los derechos humanos (...). Como chileno, me recordó la estrategia que utilizaba el dictador Pinochet para evitar el escrutinio de la comunidad internacional». Esto nos lleva a pensar que es deliberada la ausencia de citas y vínculos, para evitar la fácil tarea de desmontar la débil argumentación de la nueva estrella de Clacso para América Latina.

¿Qué es el *lanfare*? Según el texto es el «uso ilegítimo del derecho interno de cada país o del derecho internacional. La intención es dañar a quien previamente se ha identificado como oponente o líder político perjudicial para los intereses

del entramado corporativo que, *de facto*, gobierna las instituciones estadounidenses». Según el relato, las intervenciones militares se volvieron ineficaces, por lo que se sustituyeron por lo que describe como «guerra jurídica asimétrica». Y sí, según el razonamiento del libro, Estados Unidos libra una guerra contra el mundo: «este es un fenómeno militar que presupone una guerra subyacente entre partes en conflicto, aunque no siempre esté explicitada (...). Muchos conflictos, como los de clase, adoptan modalidades bélicas que escapan de la confrontación física y abarcan otros planos más sutiles». Hemos sido tan ciegos de no habernos dado cuenta, que debemos agradecer que, desde España, luego de quinientos años, nos llegue la luz de nuevo: «Es parte de una realidad que está ahí, aunque no la queramos ver y que afecta no solo a actores políticos, sino que tiene implicaciones en la reconfiguración geopolítica del actual sistema político internacional». Todo lo que está pasando en el mundo pasa a ser explicado bajo este prisma: cuando se tuerce la ley o las normas se usan de manera selectiva, cuando se vulnera el derecho internacional, cuando se ignora el cumplimiento de tratados internacionales, cuando se acomoda la legislación nacional irrespetando la legislación internacional, cuando se abusa de los medios de comunicación y se divulgan *fake news* e, incluso, cuando se combate la corrupción... todo es *lawfare*. Qué despistados hemos sido los mortales hasta ahora.

El *lawfare* se erige, en la lógica de Tirado, en el argumento perfecto para deslegitimar las investigaciones de corrupción contra presidentes de izquierda, las que existieron y las que vendrán. Es un discurso anticipatorio. Arantxa pone sus manos en el fuego por cada uno de los señalados de enriquecimiento ilícito, ya que a estos líderes sociales «no les interesan

los inmensos privilegios» y «nunca han perseguido su enriquecimiento personal, sino que han antepuesto a los intereses personales el acabar con la pobreza entre las mayorías sociales y mejorar la calidad de vida de los pueblos» (página 16). Torcer la ley para beneficio propio, una táctica tan vieja como matusalén, en la fórmula Marta Harnecker 2.0, solo es utilizada por la derecha norteamericana contra los pobres líderes izquierdistas del mundo entero. Todos los catecismos, como sabemos, se basan en explicaciones infantiles de la realidad.

Venezuela es el centro de los análisis y obsesiones de la politóloga ya que «la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela significó un punto de inflexión que marca el inicio de una nueva época». Sin embargo, incluir al país petrolero en un libro sobre el uso acomodaticio de la ley es bastante forzado, y Tirado lo sabe. Por eso solo describe el caso en ocho páginas, que contrastan con las veinticuatro dedicadas al caso brasileño. Sin embargo, su defensa sobre Venezuela es derrumbada por los hechos: «Tratan de equiparar los crímenes de guerra cometidos por distintos dictadores y funcionarios públicos de regímenes opresores, susceptibles de ser perseguidos bajo el principio de justicia universal, con los que habría cometido supuestamente Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente legítimo, sin ningún proceso judicial abierto en su país ni en ningún organismo jurídico internacional reconocido». No importan los hechos sino la apología ideológica. El libro aparece en el 2021 y ya, desde febrero de 2018, se había iniciado un examen preliminar sobre Venezuela en la Corte Penal Internacional (CPI). En noviembre del año de aparición del libro la Fiscalía de la CPI inició una investigación formal contra Venezuela, un hecho inédito en América Latina.

El *lanfare* como concepto puede servirnos para explicar la cooptación de los sistemas de justicia nacionales por Gobiernos autoritarios, en tiempos en los que las dictaduras del siglo XXI se ven obligadas a realizar elecciones. También son los sesgos, ralentizaciones y omisiones de los sistemas de justicia internacional, imperfectos y limitados. Pero el concepto en manos de un laboratorio de propaganda, como el que pertenece Tirado, se convierte en un chiste, en un arma arrojadiza que finalmente termina vaciada de contenido.

Es la grandilocuencia que deforma los oídos, advertida por Popper. La debilidad argumental de Tirado nos sugiere una hipótesis. Dado que sería interpelada fácilmente por sus pares europeos, que intente ser mercadeada como una gran intelectual para el mercado progresista latinoamericano es una curiosa forma invertida de colonialismo.

Inédito para este libro

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	11
ACTIVISMO.....	15
ANTIMILITARISMO PARA EL SIGLO XXI.....	17
POÉTICA DE LA RESILIENCIA	25
LO QUE UNO HACE ES EL DISCURSO	29
MÁS <i>BREAKING BAD</i> , MENOS CHE.....	33
EL ACTIVISMO QUE YA NO ES POSIBLE.....	35
PREFIGURAR EL MAÑANA	39
FEMINISMO OXÍMORON.....	41
APRENDIZAJES SOBRE LAS RECIENTES ACCIONES DE ALGUNOS COLEGAS DE LA SOCIEDAD CIVIL.....	45
EL <i>PUNK</i> MÁS QUE RUIDO: UN MÉTODO	51
DERECHOS HUMANOS.....	57
ACTIVISTAS Y DEFENSORES 2.0: SOBRE LA CRISIS EN EL MOVIMIENTO REGIONAL DE DD.HH.	59
DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICA.....	67
INTERVENCIÓN MILITAR Y CORTE PENAL INTERNACIONAL.....	75
LA «POLITIZACIÓN» DE LOS DD.HH.	79
EL FANZINE COMO DISPOSITIVO DE MEMORIA	83

DEMOCRACIA	85
POPULISTAS SIN APOYO POPULAR.....	87
VENEZUELA: CHOMSKY, CODE PINK Y EL COLONIALISMO DE IZQUIERDA	93
VENEZUELA: CUANDO LA IZQUIERDA DEJÓ LA CANCHA SOLA Y LIBRE AL IMPERIALISMO.....	103
DIÁLOGOS, DIALOGUISMO Y DD.HH.....	107
PRAGMATISMO Y DD.HH.	111
REPOLARIZACIÓN E IMPOTENCIA EN LA VENEZUELA DE 2019	115
¡GOOD BYE CLACSO!.....	119
CONTRA LA UNIDAD, POR LA ACCIÓN CONJUNTA	125
EL HOMBRE MUERDE AL PERRO	129
POR UNA TRANSICIÓN CON PRINCIPIOS	133
TIRADO: LA GRANDIELOCUENCIA QUE DEFORMA OÍDOS.....	139

Buscando a Galápagos es una selección de textos del sociólogo y defensor de derechos humanos venezolano Rafael Uzcátegui que dan cuenta de su propia experiencia en torno a tres de sus ámbitos de actuación: el activismo, la defensa de los derechos humanos y la democracia. Como testigo privilegiado de la deriva autoritaria venezolana y de los esfuerzos de sus organizaciones sociales por contenerla, sus reflexiones dialogan con los debates que ocurren en este momento bajo espacios cívicos cerrados, como los de Cuba y Nicaragua, o en vías de clausura, como en El Salvador y México. Uzcátegui promueve romper con la camisa de fuerza ideológica con la que usualmente se interpretan los conflictos en América Latina, para estimular la defensa y vigencia de los principios, ante la urgente necesidad de reoxigenar la democracia e innovar en las formas de intervención social.

